Contenido

[ANTECEDENTES 1](#_Toc176769474)

[DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 1](#_Toc176769475)

[a) Solicitud de información 1](#_Toc176769476)

[b) Turno de la solicitud de información 2](#_Toc176769477)

[c) Prórroga 2](#_Toc176769478)

[d) Respuesta del Sujeto Obligado 3](#_Toc176769479)

[DEL RECURSO DE REVISIÓN 6](#_Toc176769480)

[a) Interposición del Recurso de Revisión 6](#_Toc176769481)

[b) Turno del Recurso de Revisión 6](#_Toc176769482)

[c) Admisión del Recurso de Revisión 7](#_Toc176769483)

[d) Informe Justificado del Sujeto Obligado 7](#_Toc176769484)

[e) Manifestaciones de la Parte Recurrente 8](#_Toc176769485)

[f) Ampliación de plazo para resolver el Recurso de Revisión 8](#_Toc176769486)

[g) Cierre de instrucción 11](#_Toc176769487)

[CONSIDERANDOS 12](#_Toc176769488)

[PRIMERO. Procedibilidad 12](#_Toc176769489)

[a) Competencia del Instituto 12](#_Toc176769490)

[b) Legitimidad de la parte recurrente 12](#_Toc176769491)

[c) Plazo para interponer el recurso 12](#_Toc176769492)

[d) Causal de Procedencia 13](#_Toc176769493)

[e) Requisitos formales para la interposición del recurso 13](#_Toc176769494)

[SEGUNDO. Estudio de Fondo 14](#_Toc176769495)

[a) Mandato de transparencia y responsabilidad del Sujeto Obligado 14](#_Toc176769496)

[b) Controversia a resolver 17](#_Toc176769497)

[c) Estudio de la controversia 18](#_Toc176769498)

[d) Versión pública 114](#_Toc176769499)

[e) Conclusión 137](#_Toc176769500)

[RESUELVE 138](#_Toc176769501)

Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, del **once de septiembre de dos mil veinticuatro**.

**VISTO** el expediente formado con motivo del Recurso de Revisión **06917/INFOEM/IP/RR/2023** interpuesto por quien se ostenta como ***XXXXXXXX X***, a quien en lo subsecuente se le denominará **LA PARTE RECURRENTE**, en contra de la respuesta emitida por el **Ayuntamiento de Tlalmanalco**, en adelante **EL SUJETO OBLIGADO**, se emite la presente Resolución con base en los Antecedentes y Considerandos que se exponen a continuación:

# ANTECEDENTES

## DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN

### a) Solicitud de información

El **cinco de septiembre de dos mil veintitrés**, **LA PARTE RECURRENTE** presentó una solicitud de acceso a la información pública ante el **SUJETO OBLIGADO**, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX). Dicha solicitud quedó registrada con el número de folio **00292/TLALMANA/IP/2023** y en ella se requirió la siguiente información:

“copias de facturas pagadas a medios de comunicacion durante la administracion 2022-2024, directorio completo del personal que labora en el actual ayuntamiento municipal, copia de nómina de todos los que laboran dentro de la actual administración municipal y que antigüedad tienen laborando dentro del ayuntamiento, cuanto adeuda a CAEM, Luz y Fuerza del Centro (compañia de luz), ISSEMYM y a cualquier otra emprea que haya prestado sus servicios al ayuntamiento, copias de denuncias que haya actualmente en mesa de responsabilidades en contra de las actuales autoridades municipales o servidores publicos del ayuntamiento. Copia de resultados de las auditorías realizadas al Ayuntamiento, copia de denuncias y quejas realizadas dentro de contraloria interna del Ayuntamiento, a cuanto ascienden los ingresos y egresos netos de Ayuntamiento de a enero a agosto 2023, a quienes y cuanto adeuda por sueldos o nomina no pagada a los trabajadores del ayuntamiento, nombre y cargo del personal ha sido dado de baja y porque causas dentro del periodo enero 2023 a agosto 2023.” Sic

**Modalidad de entrega**: a *través del SAIMEX.*

### b) Turno de la solicitud de información

En cumplimiento al artículo 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el **seis de septiembre de dos mil veintitrés**, el Titular de la Unidad de Transparencia del **SUJETO OBLIGADO** turnó la solicitud de información a los servidores públicos habilitados que estimó pertinente (de Recursos Humanos, Tesorería Municipal, Dirección de Administración y Contraloría Municipal).

### c) Prórroga

De las constancias que obran en el SAIMEX, se advierte que el **veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés**, **EL SUJETO OBLIGADO** notificó una prórroga de siete días para dar respuesta a la solicitud de información planteada por **LA PARTE RECURRENTE**, en los siguientes términos:

|  |
| --- |
| “Tlalmanalco, México a 25 de Septiembre de 2023 |
| Nombre del solicitante: C. Solicitante |
| Folio de la solicitud: 00292/TLALMANA/IP/2023 |
|  |
| Con fundamento en el artículo 163 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se le hace de su conocimiento que el plazo de 15 días hábiles para atender su solicitud de información ha sido prorrogado por 7 días en virtud de las siguientes razones: |
|  |
| CARGA EXCESIVA DE TRABAJO |
|  |
|  |
| Lic. en C.P y Admón. Pub. Janet Orozco Banda |
| **Responsable de la Unidad de Transparencia”** |

Sin embargo, no se advierte que dicha prórroga haya cumplido con lo establecido en los artículos 49, fracción II y 163, segundo párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, pues en el expediente que obra en el SAIMEX no se advierte que **EL SUJETO OBLIGADO** haya acompañado a la solicitud de prórroga el acuerdo mediante el cual, el Comité de Transparencia aprobó la ampliación de plazo para dar respuesta a la solicitud de información.

### d) Respuesta del Sujeto Obligado

El **cuatro de octubre de dos mil veintitrés**, el Titular de la Unidad de Transparencia del **SUJETO OBLIGADO** notificó la siguiente respuesta a través del SAIMEX:

|  |
| --- |
| “Tlalmanalco, México a 04 de Octubre de 2023 |
| Nombre del solicitante: C. Solicitante |
| Folio de la solicitud: 00292/TLALMANA/IP/2023 |
|  |
| En respuesta a la solicitud recibida,…, le contestamos que: |
|  |
| Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 12 segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en seguimiento y respuesta a la solicitud de información pública con número de Folio 00292/TLALMANA/IP/2023, que derivado de una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la información solicitada, en los archivos físicos y digitales de esta Dependencia administrativa, se da respuesta conforme a lo siguiente: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 12 segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en seguimiento y respuesta a la solicitud de información pública con número de Folio 00292/TLALMANA/IP/2023, que derivado de una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la información solicitada, en los archivos físicos y digitales de esta Dependencia administrativa, se da respuesta conforme a lo siguiente: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 12 segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en seguimiento y respuesta a la solicitud de información pública con número de Folio 00292/TLALMANA/IP/2023, que derivado de una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la información solicitada, en los archivos físicos y digitales de esta Dependencia administrativa, se da respuesta conforme a lo siguiente: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 12 segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en seguimiento y respuesta a la solicitud de información pública con número de Folio 00292/TLALMANA/IP/2023, que derivado de una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la información solicitada, en los archivos físicos y digitales de esta Dependencia administrativa, se da respuesta conforme a lo siguiente: |
| ATENTAMENTE |
| Lic. en C.P y Admón. Pub. Janet Orozco Banda |

Asimismo, **EL SUJETO OBLIGADO** adjuntó a su respuesta los archivos electrónicos que se describen a continuación:

* **0292.pdf:** La Tesorería Municipal, informa que:
* Remite copias de facturas pagadas.
* No genera información por concepto de “directorio completo del personal que labora en el actual ayuntamiento municipal” “copia de nómina de todos los que laboran dentro de la actual administración municipal y que antigüedad tiene laborando dentro del ayuntamiento.” “copias de denuncias que haya actualmente en mesa de responsabilidades en contra de las actuales autoridades municipales o servidores públicos del ayuntamiento.” “copia de resultados de las auditorías realizadas al ayuntamiento.” “copias de denuncias y quejas realizadas dentro de contraloría interna del ayuntamiento.” “copias de denuncias y quejas realizadas dentro de contraloría interna del ayuntamiento.” “nombre y cargo del personal ha sido dado de baja y porque causas dentro del periodo enero 20223 a agosto 2023.”
* No se ha generado deuda con CAEM, Luz y Fuerza del Centro, ISSEMYM.
* No sé ha generado deuda por sueldos o nomina no pagada a los trabajadores del ayuntamiento.
* Además, acompaña 3 vínculos de los que refiere están relacionados con información referente a la deuda y otros pasivos, así como, lo referente “a cuánto ascienden los ingresos y egresos netos de ayuntamiento de enero a agosto 2023”
* **FACTURAS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.pdf:** Constante de 17 páginas, relativas a 17 facturas por publicaciones digitales.
* **ADMINISTRACION00292TLALMANAIP2023.pdf:** Constante de 21 páginas, se trata del oficio TLAL/ADMI/076/09/2023, por el cual, la Dirección de Administración informa que remite las facturas solicitadas.
* **FACTURAS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.pdf:** Constante de 17 facturas.
* **292.pdf:** Constante de 6 páginas, en donde se observan:
  + El oficio RH/TLAL/606/2023 del Coordinador de Recursos Humanos con el que da respuesta. Acompañando el archivo de recibos de nómina en su versión pública.
* Sobre el directorio entregan link donde refiere se localiza dicha información.
* Respecto de la antigüedad que tienen los trabajadores, en los recibos se encuentra la fecha.
* Oficio UT/TLAL/183/2023, mediante el cual, la Unidad de Transparencia remite al coordinador de Recursos Humanos el acta de sesión extraordinaria descrita en el oficio anterior, así como la creación de la versión pública de los recibos de nómina de la segunda quincena de agosto de 2023.
* Acta de la centésima séptima sesión extraordinaria del Comité de Transparencia con el acuerdo TLAL/UT/ACDO/EXT/102/2023.
* **NOMINA ACTUAL.pdf:** Archivo constante de 287 páginas relativas a la versión pública de los recibos de nómina y comprobantes fiscales digitales por internet.
* **CONTRALORIA 292 .pdf:** Relativo al oficio TLAL/CM/541/2023, de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, firmado por el Contralor Interno Municipal del H. Ayuntamiento de Tlalmanalco, en donde informa que no cuenta con los registros pertinentes para dar cumplimiento a la solicitud, por ser información que se coteja en otra área.

## DEL RECURSO DE REVISIÓN

### a) Interposición del Recurso de Revisión

El **nueve de octubre de dos mil veintitrés** **LA PARTE RECURRENTE** interpuso el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el **SUJETO OBLIGADO**, mismo que fue registrado en el SAIMEX con el número de expediente **06917/INFOEM/IP/RR/2023**, y en el cual manifiesta lo siguiente:

**ACTO IMPUGNADO**

*falta información (sic).*

**RAZONES O MOTIVOS DE LA INCONFORMIDAD**

Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información pública es la prerrogativa de las personas para buscar, difundir, investigar, recabar, recibir y solicitar información pública, sin necesidad de acreditar personalidad ni interés jurídico. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona, en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información. Solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por esta Ley. Los sujetos obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a la información que se apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y suficiencia en beneficio de los solicitantes.

### b) Turno del Recurso de Revisión

Con fundamento en el artículo 185, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el **nueve de octubre de dos mil veintitrés** se turnó el recurso de revisión a través del SAIMEX a la **Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez**, a efecto de decretar su admisión o desechamiento.

### c) Admisión del Recurso de Revisión

El **once de octubre de dos mil veintitrés** se acordó la admisión a trámite del Recurso de Revisión y se integró el expediente respectivo, mismo que se puso a disposición de las partes para que, en un plazo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, conforme a lo dispuesto por el artículo 185, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

### d) Informe Justificado del Sujeto Obligado

El **veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés EL SUJETO OBLIGADO** rindió su informe justificado a través del SAIMEX, en el cual se advierte el Comentario. “*Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 12 segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en seguimiento y respuesta a la solicitud de información pública con número de Folio 00292/TLALMANA/IP/2023, de proporcionar la información que se nos requiera y que obre en nuestros archivos, se atiende en los siguientes términos*:” acompañando los archivos siguientes:

* **292 (1).pdf** Archivo de una página, relativo al número de oficio RH/TLAL/650/2023, de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, firmado por el Coordinador de recursos humanos, quien informa a la titular de la Unidad de Transparencia que toda la información solicitada fue enviada en la respuesta de la solicitud **y agrega que** “**respecto a lo que solicita sobre los adeudos de sueldo o nómina no pagada a los trabajadores del ayuntamiento es de $0.00, no contamos con ningún adeudo, y sobre el nombre y cargo del personal que ha sido dado de baja involucra una exhaustiva revisión por lo que no se pudo informar en la respuesta, sobre las causas, todas han sido por renuncia o despido justificado**”.
* **292\_23rr06917 (1).pdf**: Archivo de dos páginas, relativas al oficio TLAL/TES/ED/214/10/2023, de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, firmado por el Tesorero Municipal, quien ratifica su respuesta a la titular de la Unidad de Transparencia.
* **facturas 292.pdf**: Archivo constante de 20 páginas, relativas a 20 facturas en versión pública, relativas a publicación digital.
* **292\_23rr admi.pdf**: Archivo de una página, relativo al oficio TLAL/ADMI/104/10/2023, firmado por el Director de Administración, mediante el cual, ratifica su respuesta.

Esta información fue puesta a la vista de **LA PARTE RECURRENTE** el **siete de agosto de dos mil veinticuatro** para que, en un plazo de tres días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera, de conformidad con lo establecido en el artículo 185, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

### e) Manifestaciones de la Parte Recurrente

**LA PARTE RECURRENTE** no realizó manifestación alguna dentro del término legalmente concedido para tal efecto, ni presentó pruebas o alegatos.

### f) Ampliación de plazo para resolver el Recurso de Revisión

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 181, párrafo tercero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, **el veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés** se acordó ampliar por un periodo razonable el plazo para resolver el presente Recurso de Revisión; acuerdo que fue notificado a las partes a través del SAIMEX ese mismo día.

El plazo para emitir resolución en el presente asunto encuentra justificación en el alto número de recursos de revisión recibidos por este Instituto, circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.

Es importante precisar que, si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, el plazo para emitir resolución se encuentra justificado en parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.

Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable. En ese sentido, el legislador estableció los términos procesales de forma general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.

Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma, debe analizarse la razonabilidad del tiempo necesario para su resolución, atentos a los siguientes criterios:

**Complejidad del asunto:** La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.

**Actividad Procesal del interesado:** Acciones u omisiones del interesado.

**Conducta de la Autoridad:** Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.

**La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso:** Violación a sus derechos humanos.

De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.

Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro “**TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO**.”, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.

Razones por las cuales cabe concluir que la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.

Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

**“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.”** consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.

**“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**.”, visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.

Por ello, este organismo garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados señala que este exceso del plazo legal para resolver el asunto resulta de carácter excepcional.

### g) Cierre de instrucción

Al no existir diligencias pendientes por desahogar, el **diez de septiembre de dos mil veinticuatro** la **Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez** acordó el cierre de instrucción y la remisión del expediente a efecto de ser resuelto, de conformidad con lo establecido en el artículo 185 fracciones VI y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. Dicho acuerdo fue notificado a las partes el mismo día a través del SAIMEX.

# CONSIDERANDOS

## PRIMERO. Procedibilidad

### a) Competencia del Instituto

Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios es competente para conocer y resolver el presente Recurso de Revisión, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; ordinal 2, fracción II, 13, 29, 36, fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero y 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; y 9, fracciones I y XXIII y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

### b) Legitimidad de la parte recurrente

El recurso de revisión fue interpuesto por parte legítima, ya que se presentó por la misma persona que formuló la solicitud de acceso a la Información Pública,debido a que los datos de accesoSAIMEX son personales e irrepetibles.

### c) Plazo para interponer el recurso

**EL SUJETO OBLIGADO** notificó la respuesta a la solicitud de acceso a la Información Pública el **cuatro de octubre de dos mil veintitrés** y el recurso que nos ocupa se interpuso el **nueve de octubre de dos mil veintitrés**; por lo tanto, éste se encuentra dentro del margen temporal previsto en el artículo 178 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el cual transcurrió del **cinco de octubre al veinticinco de octubre de dos mil veintitrés**, sin contemplar en el cómputo los días sábados, domingos y aquellos considerados como días inhábiles en términos del Calendario oficial en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, así como de labores del Instituto.

### d) Causal de Procedencia

Resulta procedente la interposición del recurso de revisión, ya que se actualiza la causal de procedencia señalada en el artículo 179, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

### e) Requisitos formales para la interposición del recurso

**LA PARTE RECURRENTE** acreditó todos y cada uno de los elementos formales exigidos por el artículo 180 de la misma normatividad.

Es importante mencionar que, de la revisión del expediente electrónico del SAIMEX, se observa que **LA PARTE RECURRENTE** no proporcionó su nombre, sino solo un seudónimo para ser identificado, lo que en estricto sentido provoca que no se colmen los requisitos establecidos en el artículo 180 de la Ley de Transparencia; sin embargo, el artículo 15 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios prevé que toda persona tendrá acceso a la información sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, de lo que se infiere que **el nombre no es un requisito indispensable** para que las y los ciudadanos ejerzan el derecho de acceso a la información pública.

Asimismo, la Ley de la materia prevé en su artículo 155, párrafo segundo la posibilidad de que las solicitudes de información sean anónimas, al utilizar un nombre incompleto o, inclusive un seudónimo. En adición a lo anterior, el propio artículo 180, en su último párrafo, establece que cuando el recurso de revisión se interponga de manera electrónica no será indispensable que contenga algunos requisitos, entre ellos, el nombre de **LA PARTE RECURRENTE;** por lo que, en el presente caso, al haber sido presentado el recurso de revisión vía SAIMEX, dicho requisito resulta innecesario.

## SEGUNDO. Estudio de Fondo

### a) Mandato de transparencia y responsabilidad del Sujeto Obligado

El derecho de acceso a la información pública es un derecho humano reconocido en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México:

***Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos***

***“Artículo 6.***

*(…)*

*Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:*

***A****.* ***Para el ejercicio del derecho de acceso a la información****, la Federación y* ***las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:***

***I. Toda la información en posesión de cualquier******autoridad****, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y* ***municipal****,* ***es pública*** *y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.* ***En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones****, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.”*

***Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México***

***“Artículo 5****.-*

*(…)*

***El derecho a la información será garantizado por el Estado. La ley establecerá las previsiones que permitan asegurar la protección, el respeto y la difusión de este derecho****.*

*Para garantizar el ejercicio del derecho de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, los poderes públicos y los organismos autónomos, transparentarán sus acciones, en términos de las disposiciones aplicables, la información será oportuna, clara, veraz y de fácil acceso.*

***Este derecho se regirá por los principios y bases siguientes****:*

***I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los*** *Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos estatales y* ***municipales****, así como del gobierno y de la administración pública municipal y sus organismos descentralizados, asimismo de cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal,* ***es pública*** *y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de interés público y seguridad, en los términos que fijen las leyes.* ***En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad****.* ***Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones****, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.”*

Asimismo, el artículo 150 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios indica que la solicitud es la garantía primaria del Derecho de Acceso a la Información, además, establece que se regirá *por los principios de simplicidad, rapidez, gratuidad del procedimiento, auxilio y orientación a los particulares.*

Por su parte, el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios refiere que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona, privilegiando el principio de máxima publicidad.

Esto es, que los Sujetos Obligados deben atender las solicitudes de acceso a la información pública que se les sean realizadas, y proporcionar la información pública que obre en su poder, conforme al estado en que se encuentre, sin que sea necesario procesar la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante; tal y como lo establece el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Es decir, que todo sujeto obligado que genere, recopile, administre, procese, archive, posea o conserven, son responsables de la misma, teniendo a su vez la obligación de proporcionar la información que se les requiera sin necesidad de resumirla, efectuar procedimientos para obtenerla, calcular o practicar investigaciones; en otras palabras, que los Sujetos Obligados sólo se concretarán a proporcionar la información solicitada que tengan en su poder en el estado que se encuentra, sin necesidad de concretarse al interés o términos específicos del solicitante.

En esa tesitura, el artículo 24 último párrafo de la Ley de la Materia dispone que los Sujetos Obligados sólo proporcionarán la información pública que generen, administren o posean en el ejercicio de sus atribuciones; por consiguiente, la información pública se encuentra a disposición de cualquier persona, lo que implica que es deber de los Sujetos Obligados, garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública, siempre y cuando no se trate de información reservada o confidencial.

Con base en lo anterior, se considera que **EL** **SUJETO OBLIGADO** se encontraba compelido a atender la solicitud de acceso a la información realizada por **LA PARTE RECURRENTE**.

### b) Controversia a resolver

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada, resulta conveniente precisar que, una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se desprende que **LA PARTE RECURRENTE** solicitó lo siguiente:

1. Facturas pagadas a medios de comunicación.
2. Directorio de personal.
3. Nómina.
4. Antigüedad de personal.
5. Adeudos a cualquier empresa que haya prestado sus servicios al ayuntamiento (entre ellas, CAEM, Luz y Fuerza del Centro, ISSEMYM.
6. Denuncias en mesa de responsabilidades en contra autoridades y servidores públicos del ayuntamiento actuales.
7. Auditorías realizadas al ayuntamiento.
8. Denuncias y quejas en la contraloría interna.
9. Ingresos y egresos netos de enero a agosto 2023.
10. Nombres y cantidad de deuda por sueldos o nomina no pagada.
11. Nombres, cargos y causas de personal dado de baja entre enero de 2023 y agosto 2023.

En respuesta, **EL SUJETO OBLIGADO** se pronunció por conducto de la persona titular de la Unidad de Transparencia (Tesorero Municipal, Director de Administración, Contralor Municipal y el Coordinador de Recursos Humanos), quien refirió adjuntar facturas y recibos de nómina en versión pública con su acta del Comité de Transparencia.

Ahora bien, en la interposición del presente recurso **LA PARTE RECURRENTE** se inconformó de que falta información, por lo cual, el estudio se centrará en determinar si la información entregada colma todo lo solicitado o si por el contrario, le asiste la razón al no habérsele entregado toda la información solicitada.

### c) Estudio de la controversia

Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio conforme a la ley. Además los ayuntamientos cuentan con facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

Ahora bien, una vez determinada la controversia a resolver, se observa que el **SUJETO OBLIGADO** no se encuentra desconociendo la misma y, por el contrario, remite información al respecto para dar respuesta a la solicitud, así conforme a la constitución la Ley Orgánica Municipal, en el artículo 27 señala que, los ayuntamientos como órganos deliberantes, deberán resolver colegiadamente los asuntos de su competencia, teniendo según la misma ley, dentro de sus atribuciones las siguientes:

**Artículo 31.- Son atribuciones de los ayuntamientos**:

I. Septimus. Conocer y en su caso aprobar las acciones que en **materia de terminación o recisión de las relaciones de trabajo** se presenten;

II. Celebrar convenios, cuando así fuese necesario, con las autoridades estatales competentes; en relación con la prestación de los servicios públicos a que se refiere el artículo 115, fracción III de la Constitución General, así como en lo referente a la administración de contribuciones fiscales;

VII. Convenir, contratar o concesionar, en términos de ley, la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos, con el Estado, con otros municipios de la entidad o con particulares, recabando, cuando proceda, la autorización de la Legislatura del Estado;

VIII. Concluir las obras iniciadas por administraciones anteriores y dar mantenimiento a la infraestructura e instalaciones de los servicios públicos municipales;

X. Conocer los informes contables y financieros anuales dentro de los tres meses siguientes a la terminación del ejercicio presupuestal que presentará el tesorero con el visto bueno del síndico;

XVIII. Administrar su hacienda en términos de ley, y controlar a través del presidente y síndico la aplicación del presupuesto de egresos del municipio;

XIX. Aprobar anualmente a más tardar el 20 de diciembre, su Presupuesto de Egresos, en base a los ingresos presupuestados para el ejercicio que corresponda, el cual podrá ser adecuado en función de las implicaciones que deriven de la aprobación de la Ley de Ingresos Municipal que haga la Legislatura, así como por la asignación de las participaciones y aportaciones federales y estatales.

De las disposiciones legales transcritas se observa que el Ayuntamiento de Tlalmanalco es competente para conocer de la información solicitada, pues dentro de sus atribuciones se observan atribuciones relacionadas con la terminación de relaciones laborales, la celebración de convenios relacionados con la prestación de servicios y obras, conocer los informes contables y financieros, administrar su hacienda, entre otras.

Reconocido lo anterior, se analizará si quienes se han pronunciado en respuesta cuentan son el área competente para conocer de la información, para ello, es necesario revisar diversos artículos de la citada Ley Orgánica Municipal, la cual establece:

**Artículo 95.- Son atribuciones del tesorero municipal:**

I. Administrar la hacienda pública municipal, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

II. Determinar, liquidar, recaudar, fiscalizar y administrar las contribuciones en los términos de los ordenamientos jurídicos aplicables y, en su caso, aplicar el procedimiento administrativo de ejecución en términos de las disposiciones aplicables;

**IV. Llevar los registros contables, financieros y administrativos de los ingresos, egresos, e inventarios;**

V. Proporcionar oportunamente al ayuntamiento todos los datos o informes que sean necesarios para la formulación del Presupuesto de Egresos Municipales, vigilando que se ajuste a las disposiciones de esta Ley y otros ordenamientos aplicables;

VI. Presentar anualmente al ayuntamiento un informe de la situación contable financiera de la Tesorería Municipal;

VI Bis. Proporcionar para la formulación del proyecto de Presupuesto de Egresos Municipales la información financiera relativa a la solución o en su caso, el pago de los litigios laborales;

XIV. Ministrar a su inmediato antecesor todos los datos oficiales que le solicitare, para contestar los pliegos de observaciones y alcances que formule y deduzca el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México;

XV. Solicitar a las instancias competentes, la práctica de revisiones circunstanciadas, de conformidad con las normas que rigen en materia de control y evaluación gubernamental en el ámbito municipal;

XVI. Glosar oportunamente las cuentas del ayuntamiento;

**Artículo 52.- Los síndicos municipales** tendrán a su cargo la procuración y defensa de los derechos e intereses del municipio, en especial los de carácter patrimonial y la función de contraloría interna, la que, en su caso, ejercerán conjuntamente con el órgano de control y evaluación que al efecto establezcan los ayuntamientos.

**Artículo 104.-** La inspección de la hacienda pública municipal compete al ayuntamiento por conducto del síndico, sin perjuicio del ejercicio de las funciones de control interno que en su caso realicen directamente los órganos de control y evaluación en los términos de esta Ley. A la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado le corresponde vigilar en los términos de los convenios respectivos, que los recursos federales y estatales que ejerzan directamente los municipios, se apliquen conforme a lo estipulado en los mismos.

**Artículo 110.- El órgano interno de control municipal** es el órgano interno de control encargado de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno, competente para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de los servidores públicos.

**Artículo 112.** El órgano interno de control municipal tendrá a su cargo las **funciones** siguientes:

I. Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación municipal;

II. Fiscalizar el ingreso y ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el presupuesto de egresos;

V. Establecer las bases generales para la realización de auditorías e inspecciones;

IX. Designar a los auditores externos y proponer al ayuntamiento, en su caso, a los Comisarios de los Organismos Auxiliares;

X. Establecer y operar un sistema de atención de quejas, denuncias y sugerencias;

XI. Realizar auditorías y evaluaciones e informar del resultado de las mismas al ayuntamiento;

XVII. Recibir las denuncias que se formulen por presuntas infracciones o faltas administrativas derivadas de actos u omisiones cometidos por las personas servidoras públicas de sus municipios, o de particulares vinculados con faltas administrativas graves; así como iniciar de oficio, por denuncia o derivado de auditorías realizadas por las autoridades competentes, los procedimientos de investigación por posibles faltas administrativas y en su caso, la calificación de faltas graves y no graves, en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

De igual forma el **Bando Municipal de Tlalmanalco**, refiere:

**ARTÍCULO 29**.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el Ayuntamiento se auxiliará con áreas centralizadas, direcciones y unidades de la Administración Pública Municipal, que estarán subordinadas a la Presidencia Municipal, así como de los Organismos Públicos Descentralizados y Órgano Autónomo, siguientes:

1. Áreas centralizadas

a) Secretaría del Ayuntamiento

**b) Tesorería Municipal**

**c) Contraloría Municipal y**

d) Secretaría Técnica

2. Direcciones:

a) Dirección de Desarrollo Urbano y

Obras Públicas

**b) Dirección de Administración**

C) Dirección de Seguridad Pública

d) Dirección de Desarrollo Económico

e) Dirección de Ecología

f) Dirección de Desarrollo Social

g) Dirección de Turismo

h) Dirección de Servicios Públicos

i) Dirección de las Mujeres

…

**ARTÍCULO 59.**- La **Contraloría Interna** como Órgano de Control, vigila que se cumplan las disposiciones legales en materia de personal, Adquisiciones, Obra Pública, Recursos Materiales y Financieros, lo relativo a la Manifestación de Bienes y Responsabilidades de las y los Servidores Públicos Municipales, promoviendo que en el Ejercicio de los Recursos Públicos se acredite la economía, la eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez, transparencia y apego a la normatividad aplicable con la finalidad del cumplimiento de los objetivos Institucionales;

**ARTÍCULO 62**.- La **Dirección de Administración** en apego a las normas aplicables, será la responsable de administrar de manera oportuna, eficaz y eficiente los recursos materiales, parque vehicular y de servicios generales, en conjunto con la gestión y capacitación de los recursos humanos para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal, en un marco de transparencia y de rendición de cuentas, adicionalmente tendrá las siguientes atribuciones:

Il. Programar, en coordinación con las áreas administrativas del Ayuntamiento, las adquisiciones de bienes, considerando sus necesidades y los programas de trabajo autorizados;

**ARTÍCULO 63.-** Para el eficiente desempeño de sus funciones, la **Dirección de Administración** se auxiliará de las siguientes coordinaciones:

a) Coordinación de recursos materiales

**b) Coordinación de recursos humanos**

c) Coordinación de servicios generales

d) Coordinación de informática

**ARTÍCULO 55.- La Tesorería Municipal**, es el Órgano de la Administración autorizado para la recaudación de los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios y otros ingresos municipales y demás contribuciones de los particulares de acuerdo a lo que establece ley de ingresos de los Municipios del Estado de México de, así mismo es responsable de efectuar erogaciones con cargo al presupuesto aprobado por el Ayuntamiento. Además de tener a su cargo y ser el área responsable de administrar de manera racional, oportuna, eficaz y eficiente los recursos económicos, humanos, materiales para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal, con estricto apego a la normatividad aplicable en un marco de transparencia y de rendición de cuentas.

De las disposiciones legales y normativas previas, se obtiene que las áreas que se han pronunciado respecto de la información solicitada son competentes para dar respuesta a la solicitud, ya que dentro de sus archivos se podría localizarse lo requerido.

Una vez establecido que el **SUJETO OBLIGADO** y sus áreas son competentes, procederemos al análisis pormenorizado de lo solicitado.

Cuadro 1

|  | **Lo solicitado** | **Lo entregado** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Copias de facturas pagadas a medios de comunicación durante la administración 2022-2024 | En respuesta, la Tesorería Municipal, remite 17 facturas pagadas a medios de comunicación durante la administración 2022-2024 (F1081, F1091, F1099, S/N 28-04-2022, F1112, F1132, F1138, F1146, F1164, F1173, F1186, F1196, F1204, F1233, F1224, F1213, F1242 de forma íntegra.  Vía Informe Justificado, remite 20 facturas. Las facturas F1081, F1091, F1099, F1112, F1132, F1138, F1146, F1164, F1173, F1186, F1196, F1204, F1242 remitidas anteriormente, pero ahora con datos testados, así como las F1285, F1213, F1224, F1233, F1261, F1254, F1277 agregadas hasta este momento. | NO COLMA  Se remitieron las facturas F1285, F1213, F1224, F1233, F1261, F1254, F1277 en incorrecta versión pública. |
| 2 | Directorio completo del personal que labora en el actual ayuntamiento municipal | En respuesta, el Coordinador de Recursos Humanos remitió un link donde refiere se localiza dicha información <https://ipomex.org.mx/ipo3/gce/list/42943.web> | NO COLMA  El vínculo no conduce a la información solicitada. |
| 3 | Copia de nómina de todos los que laboran dentro de la actual administración municipal | En respuesta, el Coordinador de Recursos Humanos, remite 287 páginas relativas a la versión pública de los recibos de nómina y comprobantes fiscales digitales por internet. | NO COLMA  Lo solicitado fue nómina no recibos de nómina. |
| 4 | Qué antigüedad tienen laborando dentro del ayuntamiento | En respuesta, el Coordinador de Recursos Humanos, refiere que esa información se encuentra contenida en los recibos de nómina.  Acompaña determinación del Comité de Transparencia respecto de la versión pública de los recibos. | **NO COLMA**  **Falta información.** |
| 5 | Cuánto adeuda a CAEM, Luz y Fuerza del Centro (compañía de luz), ISSEMYM y a cualquier otra empresa que haya prestado sus servicios al ayuntamiento | Vía respuesta, el Tesorero Municipal sostiene que: No se ha generado deuda con CAEM, Luz y Fuerza del Centro, ISSEMYM. | NO COLMA  No se pronunció de toda la información solicitada. |
| 6 | Copias de denuncias que haya actualmente en mesa de responsabilidades en contra de las actuales autoridades municipales o servidores públicos del ayuntamiento | El Contralor Interno Municipal informa que no cuenta con los registros pertinentes para dar cumplimiento a la solicitud, por ser información que se coteja en otra área. | NO COLMA. |
| 7 | Copia de resultados de las auditorías realizadas al Ayuntamiento | La Tesorería Municipal refiere que no genera información por ese concepto.  El Contralor Interno Municipal informa que no cuenta con los registros pertinentes para dar cumplimiento a la solicitud, por ser información que se coteja en otra área. | NO COLMA. |
| 8 | Copia de denuncias y quejas realizadas dentro de contraloría interna del Ayuntamiento | El Contralor Interno Municipal informa que no cuenta con los registros pertinentes para dar cumplimiento a la solicitud, por ser información que se coteja en otra área. | NO COLMA. |
| 9 | A cuánto ascienden los ingresos y egresos netos del Ayuntamiento de enero a agosto 2023 | El Tesorero Municipal acompaña vínculos electrónicos: “Estado analítico de la deuda y otros pasivos” del 1 de enero al 30 de junio de 2023.  “Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación por objeto del gasto” del 1 de enero al 30 de junio de 2023.  “Estado analítico de ingresos detallado” del 1 de enero al 30 de junio de 2023. | NO COLMA  Remite información correspondiente a los dos primeros trimestres.  Faltaron los meses de julio y agosto. |
| 10 | A quiénes y cuánto adeuda por sueldos o nomina no pagada a los trabajadores del ayuntamiento | Vía respuesta, el Tesorero Municipal sostiene que: No sé ha generado deuda por sueldos o nomina no pagada a los trabajadores del ayuntamiento.  Vía Informe Justificado, el Coordinador de recursos humanos refirió que, respecto a lo que solicita sobre los adeudos de sueldo o nómina no pagada a los trabajadores del ayuntamiento es de $0.00, no contamos con ningún adeudo. | COLMA  Se pronunció respecto de la información solicitada. |
| 11 | Nombre y cargo del personal que ha sido dado de baja y porqué causas dentro del periodo enero 2023 a agosto 2023 | En respuesta, la Tesorería Municipal señaló que no genera información por ese concepto.  Vía Informe Justificado, el Coordinador de recursos humanos refirió que, sobre el nombre y cargo del personal que ha sido dado de baja involucra una exhaustiva revisión por lo que no se pudo informar en la respuesta, sobre las causas, todas han sido por renuncia o despido justificado”. | NO COLMA  Vía Informe Justificado, se pronunció respecto de la información solicitada. |

Ahora bien, para llevar a cabo el estudio se agrupará lo solicitado considerando el área que se ha pronunciado como competente. En ese sentido, el orden será: Tesorería, Coordinación de Recursos Humanos, Dirección de Administración y Contraloría Municipal.

**Facturas pagadas a medios de comunicación durante la administración 2022-2024.**

Primeramente, se destaca que en cuanto a la temporalidad no debemos perder de vista que si bien se están solicitando facturas por el periodo de la administración 2022-2024, lo cierto es que, la solicitud fue presentada el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, motivo por el cual, el periodo de la información solicitada se entiende, comprende del uno de enero de dos mil veintidós al veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés.

Primeramente, debe decirse que **las facturas** son documentos relacionados con la compra y la venta de un producto o servicio; son emitidas por proveedores, contratistas o prestadores de servicios. De acuerdo con el Glosario de Términos Hacendarios que emite el Instituto Hacendario del Estado de México, se entiende como:

**“FACTURA**

Es el documento fiscal que emite la persona física o moral para comprobar la venta o adquisición de un bien y/o servicio.” (Sic)

En el caso, las facturas son comprobantes que amparan las erogaciones que se realizan con erario público tienen naturaleza pública pues, constituyen los medios idóneos de evidencia del gasto realizado con recursos públicos, de ahí que convenga precisar que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en su artículo 129 señala que los recursos económicos del Estado, de los Municipios, así como de los Organismos Autónomos, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez, para cumplir con los objetivos y programas a los que estén destinados.

El Código Financiero del Estado de México y Municipios, establece las políticas que deben seguirse para llevar el registro contable y presupuestal de las operaciones financieras, en los siguientes términos:

“Artículo 342.- El registro contable del efecto patrimonial y presupuestal de las operaciones financieras, se realizará conforme al sistema y a las disposiciones que se aprueben en materia de planeación, programación, presupuestación, evaluación y contabilidad gubernamental.

(…)

Artículo 343.- El sistema de contabilidad debe diseñarse sobre base acumulativa total y operarse en forma que facilite la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos, egresos y, en general, que posibilite medir la eficacia del gasto público, y contener las medidas de control interno que permitan verificar el registro de la totalidad de las operaciones financieras.

El sistema de contabilidad sobre base acumulativa total se sustentará en los postulados básicos y el marco conceptual de la contabilidad gubernamental.

Artículo 344.- Las Dependencias, Entidades Públicas y unidades administrativas registrarán contablemente el efecto patrimonial y presupuestal de las operaciones financieras que realicen, en el momento en que ocurran, con base en el sistema y políticas de registro establecidas, en el caso de los Municipios se hará por la Tesorería.

Derogado.

Todo registro contable y presupuestal deberá estar soportado con los documentos comprobatorios originales, los que deberán permanecer en custodia y conservación de las dependencias, entidades públicas y unidades administrativas que ejercieron el gasto, y a disposición del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y de los órganos de control interno, por un término de cinco años contados a partir del ejercicio presupuestal siguiente al que corresponda, en el caso de los municipios se hará por la Tesorería.

(…)

Artículo 345.- Las Dependencias, Entidades Públicas y unidades administrativas deberán conservar la documentación contable del año en curso y la de ejercicios anteriores cuyas cuentas públicas hayan sido revisadas y fiscalizadas por la Legislatura, la remitirán en un plazo que no excederá de seis meses al Archivo Contable Gubernamental. Tratándose de los comprobantes fiscales digitales, estos deberán estar agregados en forma electrónica en cada póliza de registro contable.

El plazo señalado en el párrafo anterior, empezará a contar a partir de la publicación en el Periódico Oficial, del decreto correspondiente. “

(Énfasis añadido)

Realizando una interpretación sistemática de los artículos transcritos, se desprende, que el registro contable se realizará conforme al sistema y a las disposiciones que se aprueben en materia de planeación, programación, presupuestación, evaluación y contabilidad gubernamental.

Al respecto, si bien es cierto que el Código Financiero del Estado de México y Municipios establece la obligación de los entes públicos para llevar los registros contables y presupuestales; también lo es que, dicho ordenamiento jurídico no establece que debemos entender por registro contable y presupuestal; sin embargo, el “Glosario de Términos Administrativos”, emitido por el Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. y el “Glosario de Términos para el Proceso de Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación en la Administración Pública”, elaborado por el Grupo de Trabajo de Sistemas de Información Financiera, Contable y Presupuestal de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) señalan las siguientes definiciones de las palabras registro contable y registro presupuestario:

“**REGISTRO CONTABLE**

Asiento que se realiza en los libros de contabilidad de las actividades relacionadas con el ingreso y egresos de un ente económico.” (Sic)

“**REGISTRO PRESUPUESTARIO**

Asiento contable de las erogaciones realizadas por las dependencias y entidades con relación a la asignación, modificación y ejercicio de los recursos presupuestarios que se les hayan autorizado.” (Sic)

Por otra parte, se establece que el sistema de contabilidad sobre base acumulativa total se sustentará en los principios de contabilidad gubernamental.

Igualmente, los preceptos legales citados señalan que los Sujetos Obligados deben contar con una unidad administrativa que registra contablemente el efecto patrimonial y presupuestal de las operaciones financieras que realizan, en el momento en que ocurran, con base en el sistema y políticas de registro establecidas.

Correlativo a lo anterior, es preciso referir una definición de *póliza contable*, la cual, primeramente, no está definida en el Código Financiero del Estado de México y Municipios; no obstante, los ya mencionados Glosarios la definen como:

*“****PÓLIZA CONTABLE***

Documento en el cual se asientan en forma individual todas y cada una de las operaciones desarrolladas por una institución, así como la información necesaria para la identificación de dichas operaciones.” (sic)

Así, se advierte que la póliza contable constituye un registro contable y presupuestal con el que cuentan los Municipios para el registro de sus operaciones relacionadas con sus ingresos y egresos y se anexan los documentos o comprobantes que justifiquen las anotaciones y cantidades en ellas registradas, lo que permite la identificación plena de dichas operaciones.

En este sentido, existen diversos tipos de pólizas contables de acuerdo a las operaciones realizadas, dentro de las cuales, encontramos las llamadas pólizas de egresos, son aquellas en las cuales se anotan diariamente las operaciones que representan gastos, es decir, salidas de dinero para el **SUJETO OBLIGADO**, las que, además, deben encontrarse acompañadas de las documentales que sirven de soporte de dicho movimiento.

De este modo, **EL SUJETO OBLIGADO** debe tener registro de la expedición de las pólizas de egresos; que le son requeridos a través del ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública, ya que con tales documentales acredita y soporta el gasto realizado, es decir se hace del conocimiento de los particulares el uso y destino de los recursos públicos.

De igual forma, es de suma importancia destacar que el penúltimo párrafo, del artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, establece como deber de los sujetos obligados de hacer pública toda la información relativa a los montos y personas a quienes se entreguen recursos públicos, con la única finalidad de dar a conocer a la ciudadanía la forma, términos y montos en que se aplican los recursos públicos y con ello transparentar la forma, términos, causas y finalidad en la disposición de esos recursos; ya que este precepto legal que establece:

***“Artículo 23…***

Los sujetos obligados deberán hacer pública toda aquella información relativa a los montos y las personas a quienes entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos, así como los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos.

*(…)”*

De acuerdo con lo entregado se observa:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Lo solicitado** | **Lo entregado** | **Observación** |
| **1** | **Copias de** **facturas pagadas a medios de comunicación durante la administración 2022-2024** | En respuesta, la Tesorería Municipal, remite 17 facturas pagadas a medios de comunicación durante la administración 2022-2024 (F1081, F1091, F1099, S/N 28-04-2022, F1112, F1132, F1138, F1146, F1164, F1173, F1186, F1196, F1204, F1233, F1224, F1213, F1242 de forma íntegra.  Vía Informe Justificado, remite 20 facturas. Las facturas F1081, F1091, F1099, F1112, F1132, F1138, F1146, F1164, F1173, F1186, F1196, F1204, F1242 remitidas anteriormente, pero ahora con datos testados, así como las F1285, F1213, F1224, F1233, F1261, F1254, F1277 agregadas hasta este momento. | Se remitieron las facturas F1285, F1213, F1224, F1233, F1261, F1254, F1277 en incorrecta versión pública. |

En ese orden de ideas, el **SUJETO OBLIGADO** a través de la Tesorería Municipal entregó facturas en dos momentos, el primero, en respuesta y, el segundo vía informe justificado; facturas que, si bien corresponden a la temporalidad solicitada, también cierto es que algunas de ellas no cumplen con su integridad por lo que no puede tenerse por colmado lo solicitado, ello es así al haberse testado información que es de interés público.

Al respecto es importante señalar que**, EL SUJETO OBLIGADO**, al entregar los documentos solicitados, debe dejar visible los datos del proveedor, en su caso, RFC, cadenas digitales y el domicilio fiscal; es decir, no debe testarse dato alguno relacionado con el contribuyente, aunque el proveedor sea una persona física. Esto se debe a que del ejercicio de ponderación entre el derecho a la protección de datos personales con el derecho de acceso a la información pública en el caso particular, es de mayor trascendencia el derecho de cualquier persona a conocer en qué se gastan los recursos públicos, puesto que se trata de erogaciones que realiza un órgano del Estado con base en los recursos que encuentran su origen en mayor medida en las contribuciones aportadas por los gobernados, por lo que debe transparentarse su ejercicio.

Además, las personas físicas que prestan servicios o venden productos a las instituciones públicas renuncian implícitamente a una parte de su derecho a la intimidad al obtener beneficios y lucros de los recursos públicos por los servicios que prestan o productos que venden, por lo que no puede considerarse como información clasificada lo relativo a su nombre y domicilio fiscal, atento a que dicha información es la que puede generar certeza en los gobernados, en el sentido de que se está ejerciendo debidamente el presupuesto, esto es, se están realizando pagos a una persona que es la expedidora de un documento por el que se hizo un pago con dinero del erario público.

Por otro lado, es importante señalar que por cuanto hace al número de cuenta bancaria de los particulares debe ser clasificado como confidencial con fundamento en las fracciones I y II del artículo 143 de la Ley de la Materia de la Entidad; en razón de que, con su difusión se estaría poniendo en riesgo la seguridad de su titular. Además de que, la publicidad de los números de cuenta bancaria de los particulares en nada contribuye a la rendición de cuentas, sino por el contrario, dar a conocer los números de las cuentas bancarias hace vulnerable a las personas físicas, al abrir la posibilidad de que terceros que cuenten con las posibilidades tecnológicas y/o económicas puedan realizar actos ilícitos mediante operaciones cibernéticas; en esa virtud, este Instituto determina que dicha información no puede ser del dominio público, toda vez que se podría dar un uso inadecuado a la misma o cometer algún ilícito o fraude en contra del patrimonio de los particulares.

Lo anterior encuentra sustento en el criterio 10/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que a la letra dicen:

**“Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales privadas.** El número de cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria de particulares es información confidencial, al tratarse de un conjunto de caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros para identificar las cuentas de sus clientes, a través de los cuales se puede acceder a información relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones; por tanto, constituye información clasificada con fundamento en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.”

Ahora bien, por cuanto hace a las cuentas bancarias de los Sujetos obligados, dicha información no puede considerarse como confidencial, pues la difusión de dichas cuentas o claves interbancarias, favorecen a la rendición de cuentas; ello tiene sustento en el criterio 11/17, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el cual para mayor referencia se inserta a continuación:

“**Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de sujetos obligados que reciben y/o transfieren recursos públicos, son información pública.** La difusión de las cuentas bancarias y claves interbancarias pertenecientes a un sujeto obligado favorece la rendición de cuentas al transparentar la forma en que se administran los recursos públicos, razón por la cual no pueden considerarse como información clasificada. “

Así, respecto de las facturas remitidas en forma íntegra identificadas con los números F1081, F1091, F1099, S/N 28-04-2022, F1112, F1132, F1138, F1146, F1164, F1173, F1186, F1196, F1204, F1233, F1224, F1213 y F1242 se tienen por presentadas, sin embargo, respecto de aquellas remitidas en versión pública vía informe justificado es **fundado** el motivo de inconformidad y, por lo tanto, es procedente **modificar** la respuesta entregada y ordenar sean remitidas:

A. En forma íntegra las facturas F1285, F1213, F1224, F1233, F1261, F1254, F1277 remitidas vía Informe Justificado.

**Adeudos con CAEM, Luz y Fuerza del Centro (compañía de luz), ISSEMYM.**

Al respecto, el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción III establece que los Ayuntamientos dentro de sus funciones tienen a su cargo servicios públicos tal como:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

b) Alumbrado público.

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

d) Mercados y centrales de abasto.

e) Panteones.

f) Rastro.

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.

Además de los anteriores, la Ley Orgánica Municipal, reconoce:

Artículo 125.- Los municipios tendrán a su cargo la prestación, explotación, administración y conservación de los servicios públicos municipales, considerándose enunciativa y no limitativamente, los siguientes:

…

IX. Embellecimiento y conservación de los poblados, centros urbanos y obras de interés social;

X. Asistencia social en el ámbito de su competencia, atención para el desarrollo integral de la mujer y grupos vulnerables, para lograr su incorporación plena y activa en todos los ámbitos;

XI. De empleo.

Artículo 126.- La prestación de los servicios públicos deberá realizarse por los ayuntamientos, sus unidades administrativas y organismos auxiliares, quienes podrán coordinarse con el Estado o con otros municipios para la eficacia en su prestación.

Podrá concesionarse a terceros la prestación de servicios públicos municipales, a excepción de los de Seguridad Pública y Tránsito, prefiriéndose en igualdad de circunstancias a vecinos del municipio.

Artículo 127.- Cuando los servicios públicos sean prestados directamente por el ayuntamiento, serán supervisados por los regidores o por los órganos municipales respectivos, en la forma que determine esta Ley y los reglamentos aplicables.

Los particulares podrán participar en la prestación de servicios públicos, conforme a las bases de organización y bajo la dirección que acuerden los ayuntamientos.

De las disposiciones legales previas, se observa que los Ayuntamientos deben proporcionar servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y aguas residuales; de alumbrado público y asistencia social, entre otros.

Se destacan los servicios anteriores, ya que, de la solicitud, se observa que solicita los adeudos a CAEM (Comisión del Agua del Estado de México) encargada de Coordinar el Sistema Estatal del Agua; ISSEMYM (Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios) institución cuyo objetivo es otorgar las prestaciones de seguridad social a favor de los servidores públicos, de sus familiares o dependientes económicos, tendientes a mejorar sus condiciones económicas, sociales y culturales y, respecto de Luz y Fuerza del Centro, se advierte que se trata de un organismo público descentralizado extinto por Decreto presidencial del once de octubre de dos mil nueve[[1]](#footnote-1).

Del servicio de agua, el propio Bando Municipal de Tlalmanalco establece:

En materia de Agua Potable, drenaje y alcantarillado: XI. Implementar programas de contingencia en épocas de lluvia, para prevenir y solucionar problemas de inundación en coordinación con la CAEM;

Respecto de la Seguridad Social, la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, establece que:

ARTICULO 2.- La aplicación y cumplimiento del régimen de seguridad social que regula esta ley, le corresponde al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios.

ARTÍCULO 6.- Los derechos que otorga la presente ley a los servidores públicos se generan a partir de su ingreso al servicio independientemente de la fecha en que el Instituto reciba las cuotas y aportaciones establecidas. Las instituciones públicas deberán remitir al Instituto, en un plazo no mayor de 10 días hábiles a partir del ingreso al servicio del servidor público, los datos necesarios para su registro y control.

ARTÍCULO 98. Son obligaciones de las instituciones públicas:

…

VIII. Cubrir las aportaciones del régimen de seguridad social que les correspondan, así como retener las cuotas y descuentos a cargo de los servidores públicos y enterarlos oportunamente en los términos que establece la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios;

De lo anterior, se advierte que el Ayuntamiento de Tlalmanalco debe proporcionar el servicio de agua y de asistencia social, entre otros; y que derivado de los convenios que generé deberá pagar a los entes encargados por dichos servicios prestados.

Ahora bien, del servicio de alumbrado público, se destaca que el Bando Municipal de Tlalmanalco establece:

IX. Las actividades técnicas que realice este Municipio en la prestación del servicio público de alumbrado, se sujetarán a los lineamientos establecidos por la Coordinación de Alumbrado Público y por la **Comisión Federal de Electricidad**.

En ese sentido, es importante señalar que el artículo 2° de la Ley de la Comisión Federal Electricidad refiere que dicha Comisión es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión que conforme al artículo 7° podrá celebrar toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas subsidiarías y empresas filiales.

Conforme a lo referido en la página Oficial de la Comisión Federal de Electricidad[[2]](#footnote-2), si **el servicio de alumbrado público representa un costo por el consumo eléctrico y mantenimiento de las luminarias,** los municipios deben de buscar la forma para generar ingresos propios.

Conforme a lo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica, en sus artículos 71, 73, 74 y 96, la industria eléctrica se considera de utilidad pública, puesto que las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica son se interés social y público, por lo que los Gobiernos de los Estados, Ciudad de México y Municipios, para el desarrollo de proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, deberán de realizar negociaciones y acuerdos de manera transparente, debiendo contener dentro de sus contratos por lo menos derechos y obligaciones de las partes, así como posibles mecanismos de solución de controversias.

En el caso, se observa lo siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Lo solicitado** | **Lo entregado** | **Observaciones** |
| 5 | Cuánto adeuda a CAEM, Luz y Fuerza del Centro (compañía de luz), ISSEMYM y a cualquier otra empresa que haya prestado sus servicios al ayuntamiento | Vía respuesta, el Tesorero Municipal sostiene que: No se ha generado deuda con CAEM, Luz y Fuerza del Centro, ISSEMYM; | Se pronunció respecto de la información solicitada. |

De la respuesta entregada se obtiene que, por cuanto a la Comisión de Agua del Estado de México y el ISSEMYM, se tiene por colmada la respuesta, al haber existido un pronunciamiento por parte del **SUJETO OBLIGADO**.

Respecto la respuesta relacionada con Luz y Fuerza del Centro, se advierte que, si bien el solicitante, hace alusión a un ente extinto, lo cierto es que no es especialista en la materia para saber que ese servicio en la actualidad está relacionado con la Comisión Federal de Electricidad. El **SUJETO OBLIGADO** debió suplir dicha deficiencia en la solicitud y pronunciarse respecto de quien otorga ese servicio hoy en día, pues al no haberlo realizado dejó al solicitante en estado de incertidumbre.

Lo anterior es relevante porque este Instituto no puede tener certeza de que el **SUJETO OBLIGADO** se esté pronunciando respecto de algún adeudo con la Comisión Federal de Electricidad o si efectivamente habla de la extinta Luz y Fuerza del Centro, por tanto, en estima de este Órgano Garante la respuesta emitida por el **SUJETO OBLIGADO** carece de certeza, congruencia y exhaustividad, sirve de sustento a lo anterior el criterio 02/17, emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales:.

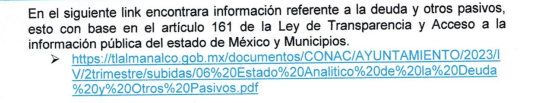
*“****Congruencia y exhaustividad.*** *Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información,* ***la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado****; mientras que* ***la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados.*** *Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de información.”*

(Énfasis añadido)

Del citado criterio, se desprende que todo acto administrativo debe apegarse al principio de congruencia, lo que implica que, exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, así entre lo solicitado y lo entregado debe guardar una relación lógica a fin de satisfacer la solicitud correspondiente.

Aunado a lo anterior, este Órgano Garante debe actuar observando el principio de certeza conforme al artículo 9 fracción I de la Ley de la materia, es decir, otorgandoseguridad y certidumbre jurídica a los particulares, situación que, de la respuesta del **SUJETO OBLIGADO** no se alcanza.

Por cuanto a la **deuda de** **cualquier otra empresa** que haya prestado sus servicios al ayuntamiento, en la respuesta entregada por el **SUJETO OBLIGADO** no se advierte respuesta frontal a dicho planteamiento, sin embargo, de la respuesta proporcionada por el Tesorero Municipal se observa:



Respecto a ello, este Organismo Garante considera que dicho enlace no puede tenerse por válido, toda vez que el enlace electrónico debe ser preciso y directo, situación que en el caso no acontece, ya que el documento se encuentra en PDF en formato de imagen no editable, perdiendo su característica de ser **directo**.

Asimismo, al ser demasiado extenso el número de caracteres que conforman el enlace, por corresponder no sólo al URL sino que además está conformada por una **cadena de encriptación**, la cual corresponde a una serie de caracteres cifrados o codificados que se utilizan para proteger la información transmitida a través de una URL, en general, la encriptación de una URL se utiliza para proteger **datos sensibles**, como información de inicio de sesión, datos personales o cualquier otra información.

Cuando se encripta una URL, los datos en la dirección web se convierten en una cadena de caracteres **que no es fácilmente comprensible para cualquier persona que intercepte la transmisión de datos** ya que esto es para proteger la privacidad y la seguridad de la información transmitida, luego entonces intentar transcribir, carácter por carácter existe una alta posibilidad que dicha tarea no sea exitosa.

Por tanto, al corresponder a una tarea ardua su captura, para posteriormente insertarlo en el navegador de Internet de manera manual, sin ningún tipo de error en su captura, se colige que deja de ser **preciso**, como lo establece la ley de la materia, por tanto son improcedentes, situación diferente acontece, cuando del mismo documento si es posible su captura mediante la selección del texto o mediante clic en el enlace (hipervínculo[[3]](#footnote-3)) cuando se remite en datos abierto, contexto que en el caso concreto no ocurre.

Atendiendo a lo anterior y al no existir pronunciamiento por parte del Tesorero Municipal y del Director de Administración (áreas competentes) se estima procedente ordenar al **SUJETO OBLIGADO** realice una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, para conocer sobre la existencia de algún adeudo al cinco de septiembre de dos mil veintitrés, de forma enunciativa no limitativa, se advierte que el documento en donde se podría constar dicha información es la balanza de comprobación detallada.

Al respecto, es oportuno citar lo dispuesto por el artículo 350 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, el cual establece que la Secretaría y las tesorerías enviarán al Órgano Superior su información patrimonial, presupuestal, de obra pública, de nómina y del cumplimiento a su Plan de Desarrollo del Estado de México, tal como se observa a continuación:

**Artículo 350.- La Secretaría y las tesorerías enviarán al Órgano Superior**, de manera trimestral, dentro de los primeros veinte días hábiles posteriores al término del trimestre que se informa, para su análisis, la siguiente información:

I. Patrimonial.

II. Presupuestal.

III. De la obra pública.

IV. De nómina.

V. Avance del cumplimiento del Plan de Desarrollo del Estado de México.

Los informes trimestrales deberán contener la evolución de las finanzas públicas integradas con los comentarios correspondientes y los estados financieros consolidados, así como un reporte de los ingresos y egresos de los organismos auxiliares.

El informe trimestral correspondiente al cuarto trimestre se entregará junto con las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de que se trate

En ese contexto, en los Lineamientos para la Integración y Entrega del Informe Trimestral Municipal, se advierte que el Módulo 1 “Información contable y financiera”, se integrará por diversos documentos, entre los que se encuentra la **Balanza de Comprobación Detallada**, tal como se muestra a continuación:



Documento que, de conformidad con el Instructivo de llenado de los Lineamientos, tiene como finalidad clasificar operaciones por cuenta y subcuentas, así como conocer el movimiento y saldo de estas, por lo que, se integrará de los siguientes datos:

“**Finalidad:** consisten en clasificar las operaciones por cuenta y subcuentas estas se presentarán hasta quinto nivel de tal manera que puedan conocer el movimiento y saldo de cada una de ellas y así garantizar la veracidad de la contabilidad. Se realizarán contemplando el trimestre, acumulando los meses del trimestre al que corresponda”.

**1. Topónimo del Ente Público** Representación gráfica que refiere al ente público.

**2. Tipo, Nombre y Número** del Ente Público Corresponde al tipo, nombre y número del ente público que emite el Anexo Financiero.

**3. Balanza de Comprobación Detallada Acumulada** Trimestral Nombre del Anexo Financiero.

4. Del XXXX al XXXX Anotar el **periodo que comprende** la información que se presenta en la Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral.

**5. Cuenta** En las primeras columnas se establece los números de las cuentas, a primer nivel y los nombres de las mismas, es decir, se definen los conceptos que tienen movimientos y saldos al final de un periodo.

**6. Nombre de la Cuenta** Muestra el nombre de las Cuentas.

**7. Saldo Inicial** Se registran cuáles son los saldos iniciales de dichas cuentas, según sean saldos deudores o saldos acreedores.

**8. Movimientos** Se muestran los movimientos Debe o Haber que se han realizado a las cuentas cada mes.

**9. Saldo Se presenta** el saldo de cada cuenta tras los movimientos contables. Recordar que el efecto de los movimientos varía según el tipo de cuenta cada mes.

**10. Saldo Final** Se registran los saldos finales de dichas cuentas, según sean saldos deudores o saldos acreedores.

**11. Total** Se presenta debajo de las cuentas se debe realizar la suma de las cuentas. Recordar que para que la balanza de comprobación sea correcta, la suma de los saldos deudores y acreedores debe de ser igual, lo mismo para los Debes y Haberes.

Se realizarán contemplando el trimestre y cada mes tendrá las columnas descritas con anterioridad, acumulando los meses del trimestre al que corresponda.” (Sic)

Conforme a ello, se advierte que el Ayuntamiento está obligado a generar y poseer el documento requerido, a saber, la Balanza de Comprobación Detallada acumulada Trimestral, el cual debe presentar al Órgano Superior de Fiscalización mediante los Informes Trimestrales, que son enviados a través de su Tesorería Municipal.

Bajo esa premisa, cabe recordar que, en respuesta, el **SUJETO OBLIGADO** no se pronunció al respecto, por lo que no colmó la pretensión de la **PARTE RECURRENTE.**

En consecuencia, atendiendo al principio de máxima publicidad y con la finalidad de privilegiar el derecho de acceso a la información pública de **LA PARTE RECURRENTE,** el Pleno de este Instituto estima que el motivo de inconformidad resulta **fundado**, por lo que es procedente **modificar** la respuesta entregada y ordenar al **SUJETO OBLIGADO** haga entrega de ser procedente en versión pública del documento o documentos en donde conste:

**B.** La cantidad que adeuda a Comisión Federal de Electricidad al cinco de septiembre de dos mil veintitrés.

**C.** La cantidad que adeuda a cualquier otra empresa que haya prestado sus servicios al ayuntamiento al cinco de septiembre de dos mil veintitrés.

**Nómina de trabajadores.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lo solicitado | Lo entregado | Observaciones |
| 3 | Copia de nómina de todos los que laboran dentro de la actual administración municipal | En respuesta, el Coordinador de Recursos Humanos, remite 287 páginas relativas a la versión pública de los recibos de nómina y comprobantes fiscales digitales por internet. | NO COLMA  Lo solicitado fue nómina no recibos de nómina. |

**Adeudos por sueldos o nómina.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lo solicitado | Lo entregado | Observaciones |
| 10 | A quiénes y cuánto adeuda por sueldos o nómina no pagada a los trabajadores del ayuntamiento | Vía respuesta, el Tesorero Municipal sostiene que: No sé ha generado deuda por sueldos o nomina no pagada a los trabajadores del ayuntamiento.  Vía Informe Justificado, el Coordinador de recursos humanos refirió que, respecto a lo que solicita sobre los adeudos de sueldo o nómina no pagada a los trabajadores del ayuntamiento es de $0.00, no contamos con ningún adeudo. | El Sujeto Obligado a través de las áreas competentes se pronunció respecto de la información solicitada. |

Para efecto de analizar si se colmó o no lo solicitado en estos dos puntos, primeramente es importante señalar que de acuerdo con la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios:

***ARTÍCULO 71****. El sueldo es la retribución que la institución pública debe pagar al servidor público por los servicios prestados.*

De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal y el Bando Municipal de Tlalmanalco citado anteriormente, el **SUJETO OBLIGADO** es competente de la información solicitada. Ahora bien, respecto de los servidores públicos habilitados que se han pronunciado en respuesta, el Tesorero Municipal y el Coordinador de Recursos Humanos, son competentes para ello.

Nómina es el “*documento contable que contiene la relación de los trabajadores con las percepciones monetarias de cada uno; además, que también se refiere al recibo individual y justificativo que indica los sueldos de los trabajadores, incluyendo las prestaciones y deducciones correspondientes*”[[4]](#footnote-4).

De la misma manera, Nómina es un “*listado general de los trabajadores de una institución, en el cual se asientan las percepciones brutas, deducciones y alcance neto de las mismas*”[[5]](#footnote-5).

Dicho lo anterior, si bien es cierto que en nuestra legislación no existe como tal una definición del término ***nómina,*** el *“Glosario de Términos Usuales de Finanzas Públicas”* del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el *“Glosario de Términos Administrativos”*, emitido por el Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. y el *“Glosario de Términos para el Proceso de Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación en la Administración Pública”,* elaborado por el Grupo de Trabajo de Sistemas de Información Financiera, Contable y Presupuestal de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) señalan la siguiente definición de la palabra:

***“NÓMINA:*** *Listado general de los trabajadores de una institución, en**el cual se asientan las percepciones brutas, deducciones y**alcance neto de las mismas; la nómina es utilizada para**efectuar los pagos periódicos (semanales, quincenales o**mensuales) a los trabajadores por concepto de sueldos y**salarios.”*

Ahora bien, la definición de bono el artículo 153-J de la Ley Federal del Trabajo establece que para elevar la productividad en las empresas, se elaboran programas que tienen como objeto entre otros el de implementar sistemas que permitan determinar en forma y monto apropiados los incentivos, **bonos o comisiones** derivados de la contribución de los trabajadores a la elevación de la productividad, es decir se entiende como un pago extra que recibe el empleado, adicionalmente a su salario como un premio, esto es abonado cuando el empleado alcanza o supera los objetivos establecidos por la empresa.

Conforme a lo anterior, se obtiene que **la nómina es un documento que contiene una relación, un listado general de los servidores públicos de una institución o dependencia, en el cual se asientan los nombres y cargos con las percepciones brutas, deducciones y alcance neto de las mismas.**

Es preciso señalar que, el artículo 147 de la **Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México**, establece que los trabajadores al servicio del Estado y los miembros de los Ayuntamientos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su empleo, cargo o comisión, que será determinada en el presupuesto de egresos que corresponda.

Por su parte, el artículo 3°, fracción XXXII, del **Código Financiero del Estado de México y Municipios** establece que la remuneración consiste en los pagos hechos por concepto de sueldo, compensaciones, gratificaciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones, en especie y cualquier otra percepción o prestación que se entregue al servidor por su trabajo.

De igual forma, la **Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en su artículo 220 K**, establece los documentos que tiene la obligación de conservar el Sujeto Obligado, entre los que se encuentran los recibos de pagos:

***ARTÍCULO 220 K.-*** *La institución o dependencia pública tiene la obligación de conservar y exhibir en el proceso los documentos que a continuación se precisan:*

*I. Contratos, Nombramientos o Formato Único de Movimientos de Personal, cuando no exista Convenio de condiciones generales de trabajo aplicable;*

*II. Recibos de pagos de salarios o las constancias documentales del pago de salario cuando sea por depósito o mediante información electrónica;*

*III. Controles de asistencia o la información magnética o electrónica de asistencia de los servidores públicos;*

*IV. Recibos o las constancias de depósito o del medio de información magnética o electrónica que sean utilizadas para el pago de salarios, prima vacacional, aguinaldo y demás prestaciones establecidas en la presente ley; y*

*V. Los demás que señalen las leyes.*

*Los documentos señalados en la fracción I de este artículo, deberán conservarse mientras dure la relación laboral y hasta un año después; los señalados por las fracciones II, III, IV durante el último año y un año después de que se extinga la relación laboral, y los mencionados en la fracción V, conforme lo señalen las leyes que los rijan. Los documentos y constancias aquí señalados, la institución o dependencia podrá conservarlos por medio de los sistemas de digitalización o de información magnética o electrónica o cualquier medio descubierto por la ciencia y las constancias expedidas por el encargado del área de personal de éstas, harán prueba plena.*

*…”*

En resumen, **toda institución pública o dependencia del Estado de México** debe **pagar el salario**, prima vacacional, aguinaldo y demás prestaciones legales procedentes a los servidores públicos, y, conservar las constancias documentales en donde se sustente dicha circunstancia; todos los servidores públicos tienen el derecho a recibir remuneraciones irrenunciables por el desempeño de un empleo, cargo o comisión, en función de las responsabilidades asumidas; remuneraciones que según el texto constitucional serán públicas; la nómina, es el listado general de los trabajadores de una institución, en el cual se asientan las percepciones brutas, deducciones y alcance neto de las mismas y, los “recibos o comprobantes de pago” sirven también para documentarlo, sin embargo se trata de formatos completamente diferentes.

Esto es, en razón de que las remuneraciones señaladas en párrafos anteriores son pagadas mediante la aplicación de fondos públicos, dichas erogaciones son fiscalizadas por la Legislatura a través del Órgano Superior de Fiscalización, para ello, el artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, establece las facultades y obligaciones de la Legislatura de las cuales podemos resaltar las siguientes:

***“Artículo 61.***

(…)

***XXXIII.*** *Revisar, por conducto del* ***Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México****, las cuentas y actos relativos a la aplicación de los fondos públicos del Estado y de los Municipios, así como fondos públicos federales en los términos convenidos con dicho ámbito que incluirán la información correspondiente a los Poderes Públicos, organismos autónomos, organismos auxiliares, fideicomisos públicos o privados y demás entes públicos que manejen recursos del Estado y Municipios;*

*(…)*

***XXXIV.*** *Fiscalizar la administración de los ingresos y egresos del Estado y de los Municipios, que incluyen a los Poderes Públicos, organismos autónomos, organismos auxiliares, fideicomisos públicos o privados y demás entes públicos que manejen recursos del Estado y Municipios, a través del* ***Órgano Superior de Fiscalización****.”*

(Énfasis añadido)

Correlativo a lo anterior, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, tiene por objeto establecer disposiciones encaminadas a fiscalizar, auditar y revisar las cuentas y actos relativos a la aplicación de los recursos públicos del Estado de México y de los municipios; y en este sentido, se aprecia que el **SUJETO OBLIGADO** se halla reconocido como un Sujeto de Fiscalización con base en los artículos 2, fracción II, y 4, fracción II:

*“****Artículo 2.*** *Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:*

*(…)*

***II.*** *Municipios: A los Municipios del Estado;*

*(…)”*

*“****Artículo 4.-*** *Son sujetos de fiscalización:*

*(…)*

***II.*** *Los municipios del Estado de México;*

*(…)”*

Establecido lo anterior, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), emite anualmente una herramienta para elaborar y presentar los informes trimestrales, denominado **“Políticas para la Integración del Informe Trimestral de los Sujetos de Fiscalización Municipales”**, cuyo objetivo es establecer las especificaciones necesarias para que las entidades fiscales elaboren y presentes los referidos informes.

Estas políticas son de observancia general para todos los servidores públicos de las entidades fiscalizables de la administración pública municipal que desempeñen un empleo, cargo o comisión y que manejen recursos públicos; en atención a ello, el informe trimestral deberá ser presentado al Órgano Superior de Fiscalización.

Por cuanto hace a la información entregable en Medios de almacenamiento Electrónico, se compondrá en cuatro módulos:

Módulo 1: Información contable y financiera;

Módulo 2: Información presupuestaria;

Módulo 3: Información programática; y

**Módulo 4: Información administrativa.**

Siendo de especial interés, para el presente asunto, el contenido del Módulo 4, sobre Información Administrativa; la cual, de acuerdo con las **“Políticas para la Integración del Informe Trimestral de los Sujetos de Fiscalización Municipales”**, se compondrá de Género e Igualdad Sustantiva (Plataforma Digital), Obra (Plataforma Digital), Nómina (Plataforma Digital) e Información de Bienes Muebles e Inmuebles (Plataforma Digital), en lo que corresponde al Submódulo de Nómina, se advierte que el **SUJETO OBLIGADO** deberá integrar, en formato *XLSX* (Excel) *y TXT* (Texto plano), el documento titulado **Conciliación de Nómina** y, también, deberá generar de forma quincenal el titulado **Comprobante Bancario de la Dispersión de la Nómina** en formato *pdf*; tal como lo establece el Submódulo en comento:

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente con confianza baja

Al respecto, conviene referir que la **Conciliación de Nómina Mensual es un documento en el que se detalla** la categoría, **todas las percepciones, deducciones que recibe cada servidor público que labora en la entidad[[6]](#footnote-6)**, el cual debe contener:

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente con confianza baja

Ahora bien, de la respuesta entregada se observa que el **SUJETO OBLIGADO** en lugar de remitir la nómina que le fue solicitada, hizo entrega de 287 recibos de nómina, documentos que, si bien coinciden con algunos datos, lo cierto es que se trata de documentos con formatos diversos, con los que debe contar el **SUJETO OBLIGADO**, por lo que no se puede tener por colmada esta parte de la solicitud.

Por ende, es fundado el motivo de inconformidad planteado por **LA PARTE RECURRENTE**, y en consecuencia se modifica la respuesta entregada y se ordena al **SUJETO OBLIGADO** que haga entrega de ser procedente en versión pública de:

D. La Conciliación de Nómina de la primera y segunda quincena de agosto de dos mil veintitrés.[[7]](#footnote-7)

Por otra parte, en cuanto a los adeudos por concepto de nómina, se advierte que el **SUJETO OBLIGADO** a través de sus áreas competentes, da respuesta señalando categóricamente que no tiene adeudo por dicho concepto, por lo que se tiene dando respuesta a la solicitante.

De la respuesta emitida se observa que nos encontramos en presencia de hechos negativos, por lo que, no resulta aplicable el artículo 19 de la Ley de la materia que nos constriñe a la emisión de un acuerdo de inexistencia, robustece lo anterior, lo siguiente:

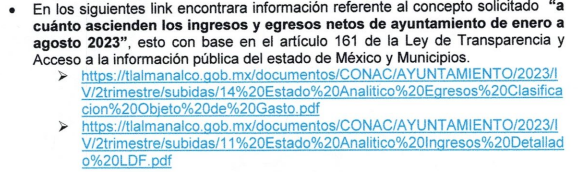
***HECHOS NEGATIVOS, NO SON SUSCEPTIBLES DE DEMOSTRACIÓN.*** *Tratándose de un hecho negativo, el Juez no tiene por qué invocar prueba alguna de la que se desprenda, ya que es bien sabido que esta clase de hechos no son susceptibles de demostración.*

De lo que se desprende que, es materialmente imposible realizar la entrega de alguna documental que no ha generado y por ende, que no obra en los archivos del **SUJETO OBLIGADO**, por lo que se tiene por colmada esta parte de la solicitud de información.

**Ingresos y egresos del ayuntamiento.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lo solicitado | Lo entregado | Observaciones |
| 9 | A cuánto ascienden los ingresos y egresos netos del Ayuntamiento de enero a agosto 2023 | El Tesorero Municipal acompaña vínculos electrónicos (no son hipervínculos, no son directos) del “Estado analítico de la deuda y otros pasivos” del 1 de enero al 30 de junio de 2023.  “Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación por objeto del gasto” del 1 de enero al 30 de junio de 2023.  “Estado analítico de ingresos detallado” del 1 de enero al 30 de junio de 2023. | NO COLMA  Si bien remite un link respecto de la información correspondiente a los dos primeros trimestres, lo cierto es que no es de acceso directo, no alcanza la temporalidad solicitada ni cumple con la Ley de la materia. |

De lo anterior, se advierte que **EL SUJETO OBLIGADO** manda una imagen del link en donde según se puede localizar la información, de la forma siguiente:



Respecto a ello, como ya se mencionó previamente respecto de este tipo de enlaces, este Organismo Garante considera que, el mismo no puede tenerse por válido, toda vez que el enlace electrónico debe ser preciso y directo; circunstancias que en el caso no se actualizan, pues no se puede acceder de forma directa a la información.

Es importante señalar que conforme a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México dispone:

“**Artículo 125.- Los municipios administrarán libremente su hacienda**, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros **ingresos** que la ley establezca, y en todo caso:

*…*

Los Ayuntamientos podrán celebrar sesiones extraordinarias de cabildo cuando la Ley de ingresos aprobada por la Legislatura, implique adecuaciones a su Presupuesto de Egresos, así como por la asignación de las participaciones y aportaciones federales y estatales. …

Por su parte, la Ley General de Contabilidad Gubernamental[[8]](#footnote-8) y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios[[9]](#footnote-9), disponen —en lo que al caso interesa— lo siguiente:

***Ley General de Contabilidad Gubernamental***

***Artículo 1.-******La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.***

***La presente Ley es de observancia obligatoria*** *para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal;* ***los ayuntamientos de los municipios****; los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.*

***Artículo 51.-*** *La información financiera que generen los entes públicos en cumplimiento de esta Ley será organizada, sistematizada y difundida por cada uno de éstos, al menos, trimestralmente en sus respectivas páginas electrónicas de internet,* ***a más tardar 30 días después del cierre del período que corresponda****, en términos de las disposiciones en materia de transparencia que les sean aplicables y, en su caso, de los criterios que emita el consejo. La difusión de la información vía internet no exime los informes que deben presentarse ante el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, según sea el caso.*

***Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios***

***Artículo 1.-******La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas.***

*Las Entidades Federativas,* ***los Municipios*** *y sus Entes Públicos se sujetarán a las disposiciones establecidas en la presente Ley y* ***administrarán sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.***

***Adicionalmente****, los Entes Públicos de las Entidades Federativas y* ***los Municipios cumplirán****, respectivamente,* ***lo dispuesto en los Capítulos I y II del Título Segundo de esta Ley, de conformidad con la normatividad contable aplicable.***

***Artículo 4.-*** *El Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos* *de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, emitirá las normas contables necesarias para asegurar su congruencia con la presente Ley, incluyendo los criterios a seguir para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera referida en la misma.*

***Artículo 18.- Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas.***

*Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad Federativa correspondiente.*

*…*

De lo anterior, podemos advertir que ambas leyes son de orden público y observancia obligatoria de los Municipios, tienen por objetivo establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización y para un manejo sostenible de sus finanzas públicas.

Asimismo, es importante traer a colación la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, la cual en su cuerpo normativo establece lo siguiente:

*“****Artículo 4.-*** *Son sujetos de fiscalización:*

*I. Los Poderes Públicos del Estado;*

*II. Los municipios del Estado de México;*

*III. Los organismos autónomos;*

*IV. Los organismos auxiliares;*

*V. Los fideicomisos previstos en el artículo 3 fracción*

*XVII del Código Financiero del Estado de México y Municipios, y aquellos que manejen recursos del Estado, Municipios, o en su caso provenientes de la federación;*

*VI. Cualquier entidad, persona física o jurídica colectiva, pública o privada, mandato, fondo u otra figura análoga que haya captado, recaudado, administrado, manejado, ejercido, cobrado o recibido en pago directo o indirectamente con recursos públicos del Estado o Municipios, o en su caso de la federación.*

***Artículo 6.*** *El Órgano Superior en el ejercicio de sus atribuciones, desarrollará la función de fiscalización conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad y de máxima publicidad. Asimismo, deberá fiscalizar las acciones de las entidades fiscalizables en materia de fondos, recursos públicos y deuda pública de conformidad con las leyes aplicables.*

***Artículo 8.-*** *El Órgano Superior tendrá las siguientes atribuciones:*

*…*

*XI. Establecer los lineamientos, criterios, procedimientos, métodos y sistemas, así como todas aquellas disposiciones de carácter general para las acciones de control y evaluación, necesarios para la fiscalización de las cuentas públicas y los informes trimestrales;*

*…*

***Artículo 39.*** *El Órgano Superior, en ejercicio de sus atribuciones de fiscalización, podrá realizar revisiones y auditorías en relación con el ejercicio fiscal sujeto a revisión.*

***Artículo 49.*** *Los informes trimestrales o la cuenta pública municipal, según corresponda, así como la documentación comprobatoria y justificativa que los ampare, quedarán a disposición de los sujetos obligados a firmarlos, para que puedan revisarlos y en su caso, anotar sus observaciones. Dichos informes serán revisados por los síndicos sin que se requiera su firma para la remisión.” Sic.*

Robustece lo anterior, lo estipulado en los artículos 87, 93, 94 y 95, fracciones I, IV, V, XVI y XVII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; porciones normativas que disponen a la literalidad lo siguiente:

***LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO***

*“****Artículo 87.-*** *Para el despacho, estudio y planeación de los diversos asuntos de la administración municipal, el ayuntamiento contará por lo menos con las siguientes Dependencias:*

*I. La secretaría del ayuntamiento;*

***II. La tesorería municipal.***

*III. La Dirección de Obras Públicas o equivalente.*

*IV. La Dirección de Desarrollo Económico o equivalente.*

*V. La Dirección de Desarrollo Urbano o equivalente;*

*VI. La Dirección de Ecología o equivalente.*

*VII. La Dirección de Desarrollo Social o equivalente.*

*VIII. La Coordinación Municipal de Protección Civil o equivalente.*

*IX. La Dirección de las Mujeres o equivalente.”*

***Artículo 93****.-* ***La tesorería municipal es el órgano encargado de la recaudación de los ingresos municipales y responsable de realizar las erogaciones que haga el ayuntamiento****.*

***Artículo 94.-*** *El tesorero municipal, al tomar posesión de su cargo, recibirá la hacienda pública de acuerdo con las previsiones a que se refiere el artículo 19 de esta Ley y remitirá un ejemplar de dicha documentación al ayuntamiento, al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y al archivo de la tesorería.*

*“****Artículo 95.-*** *Son atribuciones del* ***tesorero municipal****:*

*I. Administrar la hacienda pública municipal, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;*

*(…)*

*IV****. Llevar los registros contables, financieros y administrativos de los ingresos, egresos, e inventarios;***

*V. Proporcionar oportunamente al ayuntamiento todos los datos o informes que sean necesarios para la formulación del Presupuesto de Egresos Municipales, vigilando que se ajuste a las disposiciones de esta Ley y otros ordenamientos aplicables;*

*VI. Presentar anualmente al ayuntamiento un informe de la situación contable financiera de la Tesorería Municipal;*

*(…)*

*XVI. Glosar oportunamente las cuentas del ayuntamiento;*

*XVII. Contestar oportunamente los pliegos de observaciones y responsabilidad que haga el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, así como atender en tiempo y forma las solicitudes de información que éste requiera, informando al Ayuntamiento;*

*XVIII. Expedir copias certificadas de los documentos a su cuidado, por acuerdo expreso del Ayuntamiento y cuando se trate de documentación presentada ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México;*

*(…)” (Sic)*

De lo anterior se advierte que los Ayuntamientos tienen la atribución de administrar libremente su hacienda y controlar la aplicación del presupuesto de egresos aprobado por dicho cuerpo colegiado, **siendo atribución del Tesorero Municipal la de llevar los registros contables, financieros y administrativos de los ingresos, egresos e inventarios**.

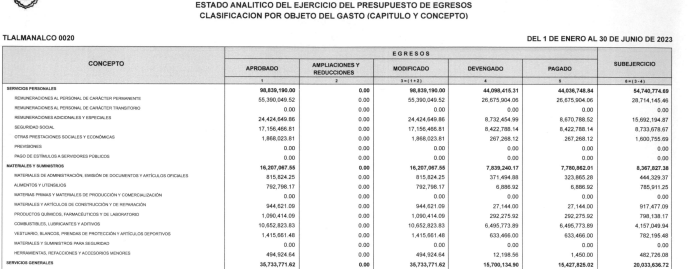
Así, el propio Bando Municipal de Tlalmanalco 2023, refiere:

**Artículo 23.-** La Hacienda Municipal, es el cúmulo de recursos económicos con que cuenta un municipio, que se formará en términos de su ley de ingresos, y que siempre debe ser en cantidad suficiente que garantice su existencia y el cumplimiento de sus funciones, que podrá clasificarse, entre otros, como: impuestos, derechos o tasas, participaciones productos y aprovechamientos.

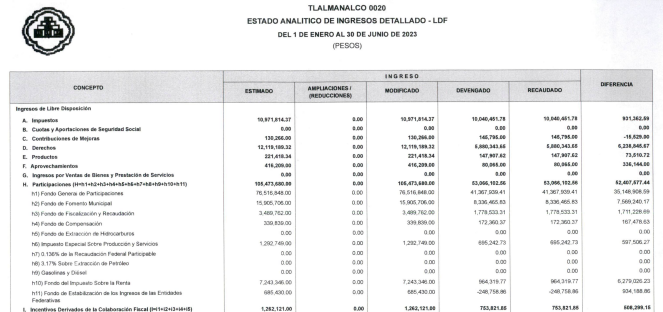
En ese orden de ideas, debemos traer a colación lo establecido en el artículo 32 de la Ley Superior de Fiscalización del Estado de México, que consagra la obligación de los Municipios de rendir de **manera trimestral al OSFEM**, los informes correspondientes.

Ahora bien, este Órgano Garante a fin de evidenciar que **EL SUJETO OBLIGADO** cuenta con la información requerida, se dio a la tarea de transcribir los vínculos proporcionados obteniendo:

<https://tlalmanalco.gob.mx/documentos/CONAC/AYUNTAMIENTO/2023/IV/2trimestre/subidas/14%20Estado%20Analitico%20Egresos%20Clasificacion%20Objeto%20de%20Gasto.pdf>



<https://tlalmanalco.gob.mx/documentos/CONAC/AYUNTAMIENTO/2023/IV/2trimestre/subidas/11%20Estado%20Analitico%20Ingresos%20Detallado%20LDF.pdf>



Por lo que, queda evidenciado que **EL SUJETO OBLIGADO** cuenta con la documentación para atender la solicitud de **LA** **PARTE RECURRENTE**.

Aunado a lo antes expuesto, cabe señalar que la información referida forma parte de las Obligaciones de Transparencia Comunes del **SUJETO OBLIGADO**, lo que nos permite traer a colación lo dispuesto por la fracción XXV del artículo 92 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios en el cual se aprecia lo siguiente:

*“****Artículo 92****.* ***Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público de manera permanente y actualizada de forma sencilla, precisa y entendible, en los respectivos medios electrónicos****, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información,* ***por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan****:*

***XXV.*** *La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como* ***los informes del ejercicio trimestral del gasto****, ¡en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones jurídicas aplicables;* ***“Sic.***

Del numeral citado, se observa que la información solicitada forma parte de las Obligaciones de Transparencia Comunes de los Sujetos Obligados, las cuales deben poner a disposición de manera permanente y actualizada en los respectivos medios electrónicos, como lo es el portal de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX) y por tanto el **SUJETO OBLIGADO** debe contar con la información requerida.

De manera que como se colige con lo anteriormente analizado, la información de ingresos y egresos debe obrar en los archivos de la Tesorería Municipal.

Luego entonces, considerando la respuesta proporcionada por **EL SUJETO OBLIGADO,** no se puede tener por colmado el derecho de acceso a la información del particular, en cuanto a este punto en estudio, y toda vez que la información peticionada por el particular es información que debe de poseer y administrar **EL SUJETO OBLIGADO**, resulta viable ordenar el documento o documentos generados en donde conste:

**E.** Ingresos y egresos, del 1 de enero al 30 de agosto de 2023.

**Directorio de personal.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lo solicitado | Lo entregado | Observaciones |
| 2 | Directorio completo del personal que labora en el actual ayuntamiento municipal | En respuesta, el Coordinador de Recursos Humanos link donde refiere se localiza dicha información <https://ipomex.org.mx/ipo3/gce/list/42943.web> | NO COLMA  El vínculo no conduce a la información solicitada. |

Primeramente, es importante señalar que de conformidad con el Bando Municipal de Tlalmanalco, las personas que laboran en el Ayuntamiento son los integrantes del Cabildo su personal y quienes integran la administración municipal, según se advierte:

**Artículo 8.-** El Municipio, es integrante reconocido de los 125 municipios del Estado de México, conforme lo que dispone el artículo 6 de la Ley Orgánica,…

C. El gobierno municipal se compone de:

I.- Un Presidente Municipal.

II.- Un Síndico Municipal.

III.- Siete Regidores, Cuatro electos por Mayoría Relativa y Tres de Representación Proporcional.

Artículo 25.- La Administración Pública Municipal para el Desarrollo de sus funciones y la máxima encomienda, se apoyará de Dependencias Administrativas Sustanciales, Direcciones, Secretarías Técnicas, Unidades Auxiliares, Coordinaciones Municipales, Oficialías, Institutos Municipales, Órganos Descentralizados Auxiliares, que se encontrarán bajo la dirección y mando del Ayuntamiento.

*Dependencias Administrativas Sustanciales:*

* *Secretaría del Ayuntamiento.*
* *Tesorería Municipal.*
* *Contraloría Interna.*

*Secretarías Técnicas:*

* *del Ayuntamiento.*
* *de Seguridad Pública.*

*Unidades Auxiliares:*

* *Unidad de Consejería Jurídica.*
* *Unidad de Transparencia.*
* *Unidad de Información, Planeación, Programación y Estadística.*
* *Unidad de Control y Bienestar Animal.*

*Direcciones Municipales de:*

* *Obras Públicas.*
* *Desarrollo Económico.*
* *Desarrollo urbano.*
* *Ecología.*
* *Desarrollo Social.*
* *Turismo.*
* *Seguridad Pública.*

*Coordinaciones Municipales de:*

* *Protección Civil.*
* *Mejora Regulatoria.*
* *Gobierno Digital.*
* *Servicios Públicos.*
* *Recursos Humanos.*

*Oficialías:*

* *de Registro civil.*
* *Calificadora.*
* *Mediadora-Conciliadora.*

*Institutos Municipales:*

* *de la Mujer.*
* *de la Juventud.*

*Órganos Descentralizados Auxiliares:*

* *Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. (SMDIF)*
* *Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte. (IMCUFIDE)*

*Órgano Autónomo:*

* *Defensoría Municipal de Derechos Humanos.*

*Además, contará con un Cronista Municipal*

Ahora bien, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios nos señala cuales son las obligaciones de transparencia común para los sujetos obligados dentro de su numeral 92 fracción VII.

***Capítulo II***

***De las Obligaciones de Transparencia Comunes***

**Artículo 92**. Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público de manera permanente y actualizada de forma sencilla, precisa y entendible, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:

*…*

VII. El directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente o de menor nivel, cuando se brinde atención al público, manejen o apliquen recursos públicos, realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base.

El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento oficial asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales, datos que deberán señalarse de forma independiente por dependencia y entidad pública de cada sujeto obligado.

Visto lo anterior, se obtiene que existe obligatoriedad de contar y entregar un directorio en el que se contemplen todas las áreas anunciadas previamente conforme al Bando Municipal señalado.

En el caso, en la respuesta entregada se advierte que el **SUJETO OBLIGADO** acompañó un (link https://ipomex.org.mx/ipo3/gce/list/42943.web) el cual, no permite el acceso directo y no conduce a la información solicitada. Este tipo de enlace no puede tenerse por válido, al no ser preciso y directo, en el caso, al corresponder a un documento PDF en formato de imagen no editable, pues pierde su característica de ser directo.

Como ya se dijo previamente, cuando se encripta una URL, los datos en la dirección web se convierten en una cadena de caracteres que no es fácilmente comprensible para cualquier persona que intercepte la transmisión de datos ya que esto es para proteger la privacidad y la seguridad de la información transmitida, luego entonces intentar transcribir, carácter por carácter existe una alta posibilidad que dicha tarea no sea exitosa.

Aunado a lo anterior, es importante señalar que en términos del artículo 161 de la Ley de Transparencia Local, cuando la información ya obré en un registro previo, el **SUJETO OBLIGADO** deberá informarlo dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud; así, en el caso, la solicitud es del cinco de septiembre de dos mil veintitrés y la respuesta del cuatro de octubre de esa misma anualidad, por lo que es evidente que se excedió el plazo señalado en el referido artículo 161.

En consecuencia, el **SUJETO OBLIGADO** tiene fuente obligacional para generar y contar con un directorio de servidores públicos que contemple todas sus áreas, por lo que es **fundado** el motivo de inconformidad y por tanto, procedente **modificar** la respuesta entregada y ordenar a **LA RECURRENTE,** el documento en donde conste:

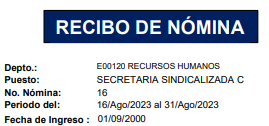
F. El Directorio del personal que labora en el ayuntamiento al cinco de septiembre de 2023.

**Antigüedad del personal.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lo solicitado | Lo entregado | **Valoración** |
| 4 | Que antigüedad tienen laborando dentro del ayuntamiento | En respuesta, el Coordinador de Recursos Humanos, refiere que esa información se encuentra contenida en los recibos de nómina.  Acompaña determinación del Comité de Transparencia respecto de la versión pública de los recibos. | **NO COLMA**  **Falta información.** |

Ante lo solicitado, en respuesta, se observa que el Coordinador de Recursos Humanos (área competente) proporcionó los recibos de nómina, señalando que la información se encuentra contenida en los mismos.

Atendiendo a lo anterior, de la revisión a los recibos de nómina se observa el dato relativo a *Fecha de Ingreso*, a través del cual, se puede obtener la antigüedad de cada servidor público. A manera de ejemplo se evidencian los primeros 3 recibos:







De acuerdo con la respuesta entregada se advierte que el **SUJETO OBLIGADO** proporcionó 287 recibos de nómina en los cuales se pueden observar, entre otros, los datos del nombre y la fecha de ingreso de cada servidor público, sin embargo, de una revisión a los mismos, se advierte que no se está entregando la información de todos los servidores públicos solicitados, ello, pues de conformidad con la estructura del propio Ayuntamiento —expuesta anteriormente— no se visualiza información de todas las áreas, de manera enunciativa: la Secretaría Técnica de Seguridad Pública, de las Unidades auxiliares de Consejería Jurídica y de Control y Bienestar Animal, así como del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) y del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE).

En consecuencia, se tiene por atendido parcialmente el requerimiento de la antigüedad de los servidores públicos de las áreas presentadas, en términos del artículo 12 de la Ley de Transparencia local, porque se proporcionó un documento que contiene la antigüedad solicitada.

Lo anterior, sin que pasé desapercibido para este Órgano Garante que dentro de la versión pública remitida de los recibos de nómina se observan datos confidenciales que se han dejado visibles y datos que se han testado de más.

Respecto de los datos que se han dejado visibles (sistema de capitalización individual voluntario *D014 SCI VOLUNTARIO*), es procedente dar vista a la Dirección General de Datos Personales; y respecto del testado de más en los recibos de nómina (tipo de contrato, cadenas originales y los sellos originales, Número de serie del emisor y/o CSD y número de certificado del SAT), se considera que, al no haber sido requeridos éstos (los recibos de nómina) como la información principal, sino que únicamente se requirió la antigüedad (la cual es visible junto con el nombre de los servidores públicos), se concluye que a ningún efecto práctico conduciría ordenar la correcta versión pública de los recibos entregados.

Lo anterior, no es obstáculo para determinar que el motivo de inconformidad es parcialmente fundado, siendo procedente modificar la respuesta entregada y ordenar al **SUJETO OBLIGADO** haga entrega de ser procedente en versión pública del documento o documentos en donde conste:

G. La antigüedad de los servidores públicos faltantes, al cinco de septiembre de dos mil veinticuatro.

En ese sentido, para efecto del cabal cumplimiento de lo ordenado el **SUJETO OBLIGADO** deberá observar el apartado correspondiente a Versión Pública de la presente resolución.

**Personal que ha sido dado de baja.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lo solicitado | Lo entregado | Valoración |
| 11 | Nombre y cargo del personal que ha sido dado de baja y porqué causas dentro del periodo enero 2023 a agosto 2023 | En respuesta, la Tesorería Municipal señaló que no genera información por ese concepto.  Vía Informe Justificado, el Coordinador de recursos humanos refirió que, sobre el nombre y cargo del personal que ha sido dado de baja involucra una exhaustiva revisión por lo que no se pudo informar en la respuesta, sobre las causas, todas han sido por renuncia o despido justificado”. | NO COLMA  Falta información |

Derivado de lo anterior, es importante traer a contexto la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, la cual dispone:

**“ARTÍCULO 89.** Son **causas de terminación de la relación laboral** sin responsabilidad para las instituciones públicas:

**I.** La renuncia del servidor público;

**II.** El mutuo consentimiento de las partes;

**III.** El vencimiento del término o conclusión de la obra determinantes de la contratación;

**IV.** El término o conclusión de la administración en la cual fue contratado el servidor público a que se refiere el artículo 8 de ésta Ley;

**V.** La muerte del servidor público; y

**VI.** La incapacidad permanente del servidor público que le impida el desempeño de sus labores.

**ARTÍCULO 92.** **El servidor público o la institución pública podrán rescindir en cualquier tiempo, por causa justificada, la relación laboral.**

**ARTÍCULO 94.** La **institución pública deberá dar aviso por escrito al servidor público de manera personal, de la fecha y causa o causas de la rescisión de la relación laboral.**

En caso de que exista imposibilidad comprobada de entregar el aviso, o que el servidor público se negare a recibirlo, la institución pública o dependencia, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la rescisión, deberá hacerlo del conocimiento del Tribunal o de la Sala, proporcionando a éste el último domicilio que tenga registrado y solicitando sea notificado el servidor público.

La falta de aviso al servidor público, al Tribunal o a la Sala por sí sola bastará para considerar que el despido fue injustificado.

**ARTÍCULO 95.** Son causas de rescisión de la relación laboral, sin responsabilidad para el servidor público:

***…***

En estos casos, el servidor público podrá separarse de su trabajo dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de las causas y tendrá derecho a que la institución pública lo indemnice con el importe de tres meses de sueldo base, veinte días por cada año devengado y cubriéndole las prestaciones a que tenga derecho, así como los salarios vencidos desde la fecha en que el Servidor Público se haya separado de su trabajo hasta por un periodo máximo de doce meses o hasta que el servidor público se incorpore a laborar en un municipio o institución pública de los poderes del Estado o cualquier organismo estatal, siempre y cuando esto último ocurra en un plazo no mayor a los doce meses antes mencionados, independientemente del tiempo que dure el proceso.

Si al término del plazo de los doce meses señalados en los artículos 95, 96 y 97 no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento al laudo, se pagarán también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe del adeudo, a razón del nueve por ciento anual capitalizable al momento del pago.

**ARTÍCULO 96.-** El servidor público podrá solicitar ante el Tribunal o la Sala correspondiente, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice. **Cuando el servidor público considere injustificada la causa de rescisión de la relación laboral, o bien lo injustificado del despido podrá demandar ante el Tribunal o en la Sala que se le cubra la indemnización de tres meses de su salario base, así como los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de doce meses o que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba con el pago de los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de doce meses, independientemente del tiempo que , dure el proceso.**

No se considerará en el pago de salarios vencidos los aguinaldos e incrementos que se otorguen en el salario de los servidores públicos mientras dure el proceso para objeto de las indemnizaciones a que se refieren los artículos 95, 96 y 97 de esta ley.

Cuando el servidor público ejercite la acción de reinstalación en el trabajo que desempeñaba, será procedente el pago proporcional de sus prestaciones a que tenga derecho con los incrementos que sufra su salario en el periodo que dure el proceso, con excepción de los salarios vencidos ya que únicamente se aplicará esta disposición en el máximo de doce meses de pago de los mismos, en caso de ser procedentes.

En cualquier estado del procedimiento el demandado podrá pagar todo o en parte lo reclamado por el actor exhibiendo la cantidad líquida en moneda nacional o en cheque certificado a nombre de éste, previa cuantificación que haga el Tribunal o la Sala de que las cantidades cubren las prestaciones señaladas en la demanda y que se encuentren ajustadas a derecho, hasta la fecha en que se exhiba. En el primer supuesto se dará por terminado el juicio liberando a la institución pública de la acción principal y sus accesorias.

El Tribunal o la Sala aprobará la consignación de pago y pondrá a disposición del actor la cantidad depositada a su favor, apercibiéndolo de que para el supuesto de no aceptar la cantidad base de su reclamación, los salarios vencidos dejarán de correr, caso contrario se ordenará el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Excepcionalmente para el efecto de que la cantidad exhibida por la parte demandada sea menor a la que le corresponda al actor, el Tribunal o la Sala le requerirá, para que en un término de cinco días hábiles, contados a partir de que surta sus efectos de notificación el acuerdo que recaiga, deposite la cantidad faltante y hecho lo anterior se tendrá por satisfecha la acción legal ejercitada.

Para la hipótesis de que la demandada sólo exhiba la cantidad por indemnizaciones y sus prestaciones accesorias dejarán de correr los salarios caídos, continuándose con el procedimiento por las prestaciones pendientes de pago.

En caso de muerte del trabajador, dejarán de computarse los salarios vencidos como parte del conflicto.

ARTÍCULO 97.- Las **instituciones públicas o dependencias** **no estarán obligadas** a **reinstalar al servidor público, pero sí a cubrirle la indemnización** de tres meses de salario base, veinte días por cada año de servicios en términos del artículo 95 párrafo segundo de esta ley y cubrirle las prestaciones a que tenga derecho, así como los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de doce meses, independientemente del tiempo que dure el proceso, exhibiendo la totalidad de la cantidad liquida en moneda nacional o mediante cheque certificado al momento de la negativa de reinstalar al actor.”

(Énfasis añadido)

De lo anterior, podemos advertir la existencia de dos supuestos, la terminación de la relación laboral y la rescisión laboral, ello sin dejar de lado la figura enmarcada en el artículo 94 tratándose del despido, o aquéllas derivadas de una sanción administrativa.

Además, se prevén los supuestos de rescisión laboral sin responsabilidad para los servidores públicos, el plazo en que éste debe separarse del trabajo cuando se actualice; asimismo, señala que en la existencia de alguno de esos supuestos, el servidor público tendrá derecho a que la institución pública lo indemnice con tres meses de sueldo base, veinte días por cada año devengado y a cubrirle las prestaciones a que tenga derecho, así como los salarios vencidos desde la fecha en que el servidor público se haya separado de su trabajo hasta que se cumplimente el laudo, o hasta que el servidor público se incorpore a laborar la institución pública de los poderes del Estado, independientemente del tiempo que dure el proceso.

Por su parte, el artículo 96 del ordenamiento legal en cita, contempla el derecho que le asiste al servidor público para solicitar ante el Tribunal o la Sala Auxiliar correspondiente, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice.

Así mismo, se señala que el servidor público opte por la indemnización, ésta será por el equivalente a tres meses de su salario base, del mismo modo que los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se cumplimente el laudo o que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba con el pago de los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se cumplimente el laudo, o hasta que el servidor público se incorpore a laborar en un municipio o institución pública de los poderes del Estado, independientemente del tiempo que dure el proceso.

Finalmente, se establece que las instituciones públicas o dependencias no estarán obligadas a reinstalar al servidor público, cuando se actualicen los supuestos previstos en el mismo precepto legal, pero sí tienen la obligación de cubrirle una indemnización por tres meses de salario base, veinte días por cada año de servicios en términos del artículo 95 párrafo segundo de la ley en cita y cubrirle las prestaciones a que tenga derecho, así como los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se cumplimente el laudo, o hasta que el servidor público se incorpore a laborar en un municipio o institución pública de los poderes del Estado, independientemente del tiempo que dure el proceso.

En el caso, la solicitante requiere el *nombre y cargo del personal que ha sido dado de baja y porqué causas dentro del periodo enero 2023 a agosto 2023,* ante ello, vía Informe Justificado, el Coordinador de recursos humanos se limitó a señalar las causas, refiriendo que todas las bajas han sido por renuncia o despido justificado.

En ese sentido, se observa que la respuesta entregada no proporciona los nombres y cargos, así como tampoco remite documental alguna de la que se puedan apreciar dichos datos respecto de las renuncias o despidos justificados que anuncia.

Ante ello, resulta relevante lo que la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios establece:

**ARTICULO 48**.- El servidor público que deje de prestar sus servicios por haber causado baja en alguna institución pública conservará, durante los dos meses siguientes a la fecha de la misma, el derecho a recibir las prestaciones de servicio de salud establecidos en esta ley, siempre y cuando haya laborado ininterrumpidamente durante un mínimo de dos meses. Del mismo derecho disfrutarán, en lo procedente, sus familiares y dependientes económicos.

Al respecto los Lineamientos generales para la operación de la plataforma de recaudación e información de seguridad social del ISSEMyM[[10]](#footnote-10) (Prisma) establecen:

1. Registro de las instituciones públicas.

1.1. Las instituciones públicas incorporadas al régimen de seguridad social del Instituto, deberán estar registradas en la Plataforma o PRISMA.

1.2. Las instituciones públicas, a través de su representante, deberán solicitar el alta del usuario autorizado, mediante las directrices señaladas por la Ventanilla Única de Atención Integral a Instituciones Públicas.

1.3. El usuario administrador de la Plataforma tendrá la facultad de registrar las altas, bajas o modificaciones de las instituciones públicas y usuarios autorizados, que le sean solicitados por el representante de la institución pública.

1.4. El usuario autorizado será responsable de mantener en secrecía la contraseña de acceso a la Plataforma o PRISMA, con el fin de asegurar el buen uso de la misma. Para lo cual, deberá cambiar de contraseña con cierta frecuencia.

1.5. El usuario autorizado será el responsable de administrar y registrar los movimientos de altas, **bajas** y/o modificaciones de servidores públicos contenidos en su nómina, así como de realizar todas las operaciones señaladas en el Manual de Usuario.

…

2. Registro de los servidores públicos.

2.1. El usuario autorizado deberá registrar en la Plataforma, el alta de todos los servidores públicos activos en la nómina de la institución pública, cubriendo con la información solicitada; así como, las **bajas** y/o modificaciones correspondientes, como se define en el Manual de Usuario.

2.2. El Instituto establecerá para las instituciones públicas, un calendario operativo en donde se señalen los periodos para pagos oportunos, movimientos de alta, **baja** y/o modificación de servidores públicos, así como pagos extemporáneos que generarán sus respectivos accesorios.

…

Dichas disposiciones normativas señalan que, corresponde a las instituciones públicas realizar el movimiento de alta y baja de los servidores públicos ante el ISSEMYM a través del sistema determinado para tal efecto. En ese sentido, el Ayuntamiento de Tlalmanalco debe generar las bajas respectivas en las cuales, se contienen datos como en el ejemplo siguiente:

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Como se aprecia del ejemplo del movimiento de aviso de baja, a través de este no se alcanza lo solicitado por la ahora **PARTE RECURRENTE**, ya que si bien se señala entre otros datos el nombre y la fecha del movimiento, lo cierto es que respecto del cargo y la causa de la baja no forman parte del mismo. En esa tesitura, es necesaria dicha documental tendría que adminicularse con otro de documento para tenerse por colmado el derecho de acceso a la información pública o, de manera enunciativa más no limitativa, se advierte que dicha información podría encontrarse dentro de las renuncias, convenios (con juicio o sin juicio) o finiquitos.

Por lo que, el motivo de inconformidad es **fundado** y, por tanto, es procedente **modificar** la respuesta entregada y ordenar al **SUJETO OBLIGADO** que realice una búsqueda exhaustiva en la que haga entrega de la información solicitada. Por lo que este Órgano Garante determina ordenar de ser procedente en **versión pública** el o los documentos donde consten:

H. Las renuncias o despidos justificados del 1 de enero al 30 agosto de 2023, señalados en su informe justificado, debiendo contener el nombre y cargo de los servidores públicos.

Finalmente, respecto de la información competencia de la Contraloría Municipal se observa:

**Denuncias y Quejas**

Al respecto, conforme a las solicitudes es importante distinguir lo siguiente:

* Denuncias en mesa de responsabilidades en contra de autoridades municipales o servidores públicos del ayuntamiento.
* Denuncias y quejas realizadas dentro de contraloría interna del Ayuntamiento.

Por **denuncia** se entiende: acto en el cual una persona comunica a una autoridad competente acerca de un evento o situación que considera contraria a la ley, injusta o perjudicial. Es una declaración formal que se presenta ante las autoridades con el propósito de que se realice una investigación y se tomen las medidas apropiadas.[[11]](#footnote-11)

Ahora bien, de la información solicitada se observa que, nos encontramos ante denuncias de materias diversas, así, en el primer supuesto se observan denuncias relacionadas con responsabilidad penal y, en el segundo con responsabilidad administrativa.

Por otra parte, respecto de la **queja**, *es la manifestación de la persona mediante la cual hace del conocimiento a la autoridad, actos u omisiones de los servidores públicos contrarios a los principios que rigen la administración pública y que le significan una afectación directa a sus intereses como gobernado.*[[12]](#footnote-12)

Establecido lo anterior, en el caso, respecto de las denuncias y las quejas para efecto del acceso a la información serán tratadas en igual de circunstancias.

Ante ello, es importante recordar las funciones del órgano de control interno del Ayuntamiento conforme a los siguientes ordenamientos jurídicos:

***Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios***, establece:

**Artículo 11.** Además de las atribuciones señaladas en el artículo anterior, los órganos internos de control, serán competentes para:

I. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir **responsabilidades administrativas**, en los términos establecidos por el Sistema Estatal Anticorrupción.

II. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos, según corresponda en el ámbito de su competencia.

**III. Presentar denuncias** por hechos que las leyes señalen como **delitos** ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México o en su caso ante el homólogo en el ámbito federal.

***Ley Orgánica Municipal***

***Artículo 112.*** *El órgano interno de control municipal tendrá a su cargo las* ***funciones*** *siguientes:*

*I. Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación municipal;*

*II. Fiscalizar el ingreso y ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el presupuesto de egresos;*

*V. Establecer las bases generales para la realización de auditorías e inspecciones;*

*IX. Designar a los auditores externos y proponer al ayuntamiento, en su caso, a los Comisarios de los Organismos Auxiliares;*

*X. Establecer y operar un sistema de atención de quejas, denuncias y sugerencias;*

*XI. Realizar auditorías y evaluaciones e informar del resultado de las mismas al ayuntamiento;*

*XVII. Recibir las denuncias que se formulen por presuntas infracciones o faltas administrativas derivadas de actos u omisiones cometidos por las personas servidoras públicas de sus municipios, o de particulares vinculados con faltas administrativas graves; así como iniciar de oficio, por denuncia o derivado de auditorías realizadas por las autoridades competentes, los procedimientos de investigación por posibles faltas administrativas y en su caso, la calificación de faltas graves y no graves, en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.*

**Bando Municipal de Tlalmanalco**

**ARTÍCULO 59.**- La **Contraloría Interna** como Órgano de Control, vigila que se cumplan las disposiciones legales en materia de personal, Adquisiciones, Obra Pública, Recursos Materiales y Financieros, lo relativo a la Manifestación de Bienes y Responsabilidades de las y los Servidores Públicos Municipales, promoviendo que en el Ejercicio de los Recursos Públicos se acredite la economía, la eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez, transparencia y apego a la normatividad aplicable con la finalidad del cumplimiento de los objetivos Institucionales;

Con lo anterior, podemos afirmar que corresponde al Ayuntamiento de Tlalmanalco, conocer de denuncias y quejas por faltas administrativas, así como la vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones; conoce e investiga los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas, substanciando los procedimientos correspondientes en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, así como presentar denuncias ante la Fiscalía por hecho que puedan ser delitos.

Ahora bien, respecto de las denuncias y quejas en materia administrativa y denuncias en materia penal, de la respuesta entregada se observa que el **SUJETO OBLIGADO** se limitó en señalar dentro del oficio TLAL/CM/541/2023, **que no cuenta con registros pertinentes** como se observa:

Texto

Descripción generada automáticamente

Texto

Descripción generada automáticamente

De la respuesta entregada se observa:

* No hay un pronunciamiento especifico respecto de las denuncias y quejas.
* NO señala si posee, genera o administra denuncias y quejas.

En consecuencia, este Órgano Garante estima que la respuesta entregada carece de la debida fundamentación y motivación, dejando en incertidumbre a la solicitante.

Conviene precisar los alcances de la fundamentación y motivación a que están sujetos todos los actos de autoridad, es oportuno remitirnos al artículo 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar todo acto que implique una molestia en la esfera de derecho de las personas:

“**Artículo 16.** Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.”

De este precepto se deduce que, en el régimen jurídico mexicano, la fundamentación y motivación de los actos o resoluciones no es exclusiva de los órganos judiciales o jurisdiccionales, sino que se extiende a todas las autoridades, entre ellas, los ayuntamientos.

En ese contexto, en todo acto que la autoridad se pronuncie en el ejercicio de sus atribuciones, debe expresar los fundamentos legales que le dieron origen y las razones por las que se deben aplicar al caso concreto. Así, la fundamentación y motivación consiste en la obligación que tiene todo ente público de expresar los preceptos jurídicos aplicables al asunto motivo del acto y las razones o argumentos de su actuar.

Al respecto, se observa la jurisprudencia respecto a qué debe entenderse por fundamentación y motivación, en los siguientes términos:

“**FUNDAMENTACION Y MOTIVACION**. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.**” [[13]](#footnote-13)**

Así, en un acto de autoridad se surte la debida fundamentación cuando se cita el precepto legal aplicable al caso concreto y la debida motivación cuando se expresan las razones, motivos o circunstancias que tomó en cuenta la autoridad para adecuar el hecho a los fundamentos de derecho.

Más aún, a través de diversa jurisprudencia dictada por el Poder Judicial de la Federación se sostiene que la finalidad de la fundamentación o motivación es la de explicar, justificar, posibilitar la defensa y comunicar la decisión de la autoridad:

“**FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN**. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción.”[[14]](#footnote-14)

En consecuencia, la fundamentación y motivación implica que, en el acto de autoridad, además de contenerse los supuestos jurídicos aplicables se expliquen claramente, por qué, a través de la utilización de la norma se emitió el acto. De este modo, la persona que se siente afectada pueda impugnar la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa.

Ahora bien, en el caso de las “***Denuncias y quejas realizadas dentro de contraloría interna del Ayuntamiento***” se advierte que la Contraloría Interna, pese a contar con atribuciones para conocer respecto de la información solicitada, se pronuncia de forma general señalando que no cuenta con registros pertinentes “*de la demás información solicitada*” pudiéndose inferir que se refiere a las denuncias y quejas al señalar que es información que se coteja en otra área.

Conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, se observa que:

***Artículo 95.*** *La investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas podrá iniciar:*

***I.*** *De oficio.*

***II. Por denuncia.***

***III.*** *Derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes o en su caso, de auditores externos.*

*Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, las autoridades investigadoras deberán garantizar, proteger y mantener el carácter de confidencial la identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones.*

***Artículo 116.*** *El procedimiento de responsabilidad administrativa dará inicio cuando las autoridades substanciadoras, en el ámbito de su competencia, admitan el informe de presunta responsabilidad administrativa.*

Es preciso señalar que, se atenderá a los dos tipos de faltas administrativas cometidas por servidores públicos: **las graves y no graves**; en éstas últimas, la imposición de la sanción le corresponde a los Órganos Internos de Control, por otro lado, respecto a las faltas administrativas graves, la imposición de la sanción le corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.

Bajo ese contexto, el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de la Entidad, considera como faltas administrativas no graves, las siguientes:

***“Artículo 50.*** *Incurre en* ***falta administrativa no grave****, el servidor público que con sus actos u omisiones, incumpla o transgreda las obligaciones siguientes:*

*I. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás servidores públicos, a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere esta Ley.*

*II. Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que puedan constituir faltas administrativas en términos del artículo 95 de la presente Ley.*

*III. Atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público. En caso de recibir instrucción o encomienda contraria a dichas disposiciones, deberá denunciar esta circunstancia en términos del artículo 95 de la presente Ley.*

*IV. Presentar en tiempo y forma la declaración de situación patrimonial y la de intereses que, en su caso, considere se actualice, en los términos establecidos por esta Ley.*

*V. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, en términos de las normas aplicables.*

*VI. Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte.*

*VII. Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública o servicios relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. …*

*VIII. Actuar y ejecutar legalmente con la máxima diligencia, los planes, programas, presupuestos y demás normas a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades, conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados.*

*IX. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado y responsabilidad o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidas de aquéllas.*

*X. Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas y servidores públicos con los que tenga relación con motivo de éste.*

*XI. Observar un trato respetuoso con sus subalternos.*

*XII. Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de esta Ley.*

*XIII. Cumplir con la entrega de índole administrativo del despacho y de toda aquella documentación inherente a su cargo, en los términos que establezcan las disposiciones legales o administrativas que al efecto se señalen.*

*XIV. Proporcionar, en su caso, en tiempo y forma ante las dependencias competentes, la documentación comprobatoria de la aplicación de recursos económicos federales, estatales o municipales, asignados a través de los programas respectivos.*

*XV. Abstenerse de solicitar requisitos, cargas tributarias o cualquier otro concepto adicional no previsto en la legislación aplicable, que tengan por objeto condicionar la expedición de licencias de funcionamiento para unidades económicas o negocios.*

*XVI. Cumplir con las disposiciones en materia de Gobierno Digital que impongan la Ley de la materia, su reglamento y demás disposiciones aplicables.*

*XVII. Utilizar las medidas de seguridad informática y protección de datos e información personal recomendada por las instancias competentes.*

*XVIII. Cumplir oportunamente con los laudos que dicte el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje o cualquier de las Salas Auxiliares del mismo, así como pagar el monto de las indemnizaciones y demás prestaciones a que tenga derecho el servidor público, y*

*XIX. Las demás que le impongan las leyes, reglamentos o disposiciones administrativas aplicables.”*

(Énfasis añadido)

Por su parte, el artículo 52 de la misma Ley precisa como faltas administrativas graves, las siguientes:

*“****Artículo 52.*** *Para efectos de la presente Ley, se consideran* ***faltas administrativas graves*** *de los servidores públicos, mediante cualquier acto u omisión, las siguientes:*

*I. El cohecho.*

*II. El peculado.*

*III. El desvío de recursos públicos.*

*IV. La utilización indebida de información.*

*V. El abuso de funciones.*

*VI. Cometer o tolerar conductas de hostigamiento y acoso sexual.*

*VII. El actuar bajo conflicto de interés.*

*VIII. La contratación indebida.*

*IX. El enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés.*

*X. El tráfico de influencias.*

*XI. El encubrimiento.*

*XII. El desacato.*

*XIII. La obstrucción de la Justicia.*

Además, de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Responsabilidades de la Entidad, **la investigación, substanciación y calificación de las faltas administrativas es competencia de los órganos internos de control** para el caso de la existencia de faltas administrativas no graves, estos podrán substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad.

En resumen, atendiendo a las disposiciones legales previas, el proceso de posibles responsabilidades administrativas se divide en dos etapas a saber:

1. **Investigación:** Dicha etapa comienza, de oficio o por la presentación de una denuncia o queja ante los Órganos Internos de Control; por lo que, estos deberán de allegarse de la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, así como realizar visitas de verificación.

**1.1** Concluidas las diligencias de investigación, procederán al análisis de los hechos, así como de la información recabada, con el fin de **determinar la existencia o inexistencia de actos de faltas administrativas graves o no graves** y así emitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y éste se presentará ante la autoridad substanciadora a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente.

**1.2** En el caso de no haberse encontrado elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción, y acreditar la presunta responsabilidad, se emitirá el **acuerdo de conclusión y archivo del expediente**, debidamente fundado y motivado.

**2. Proceso de Responsabilidad Administrativa:** Falta grave (ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México), falta no grave (ante el Órgano Interno de Control), dicho procedimiento se lleva conforme a lo siguiente:

1. Se admite el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa;
2. Se ordena el emplazamiento, para citar a audiencia, así como a las partes que deban concurrir;
3. Se lleva a cabo la audiencia inicial, en donde el presunto responsable rendirá su declaración y ofrecerá las pruebas conducentes, son llamados los terceros interesados para que manifiesten lo que a su derecho convenga y entreguen pruebas.
4. Se admiten pruebas, se abre periodo de alegatos y posteriormente se cierra la instrucción.
5. Se emite resolución, la cual deberá ser notificada al servidor público, al denunciante para su conocimiento y al jefe inmediato superior para efectos de ejecución.

En ese sentido, se considera que la respuesta entregada no colma con lo solicitado y carece de la debida fundamentación y motivación respecto de la negativa de acceso de las denuncias y quejas solicitadas, pues el pronunciamiento del **SUJETO OBLIGADO** no señala si genera, administra o posee la información solicitada, por lo que se califica como **fundado** el motivo de inconformidad es procedente **modificar** la respuesta y ordenar la búsqueda y entregar lo solicitado en versión pública, advirtiendo la procedencia y en su caso, excepción de la reserva de la información, como se determinará más adelante.

***I.*** *Denuncias y quejas realizadas dentro de contraloría interna del Ayuntamiento entre el cinco de septiembre de dos mil veintidós al cinco de septiembre de dos mil veintitrés*[[15]](#footnote-15) *de procedimientos administrativos que hayan causado estado.*

Ahora bien, respecto de ***denuncias en mesa de responsabilidades***:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Lo solicitado** | **Lo entregado** | **Observaciones** |
| 6 | Copias de denuncias que haya actualmente en mesa de responsabilidades en contra de las actuales autoridades municipales o servidores públicos del ayuntamiento. | El Contralor Interno Municipal informa que no cuenta con los registros pertinentes para dar cumplimiento a la solicitud. | NO COLMA. |

Se observa que, efectivamente como se anunció previamente, la parte solicitante requiere denuncias de naturaleza distinta a aquellas de responsabilidad administrativa, se trata de denuncias interpuestas ante la Fiscalía por la presunción de delitos, es decir, responsabilidad penal, por ejemplo, aquellos cometidos por servidores públicos en agravio de la hacienda pública estatal o municipal y de organismos del sector auxiliar; contra el correcto funcionamiento de las instituciones de seguridad pública y órganos jurisdiccionales, y de la seguridad de los servidores públicos y particulares, por mencionar algunos contemplados en el Código Penal de la entidad.

Aunado a ello, la propia Ley de Responsabilidades Administrativas del   
Estado de México y Municipios establece la atribución de los órganos internos de control, para presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México o en su caso ante el homólogo en el ámbito federal.

E incluso, el Código Nacional de Procedimientos Penales, señala el deber de denunciar de las autoridades en la forma siguiente:

**Artículo 222. Deber de denunciar**

…

Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a los imputados, si hubieren sido detenidos en flagrancia. Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes.

…

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México es la institución de procuración de justicia penal, independiente e imparcial, que procura el acceso a la justicia conforme a derecho, para que se esclarezcan los hechos denunciados, mediante mecanismos alternativos de solución de controversias o un debido proceso, y en su caso, se declare la existencia del delito, se castigue al culpable, se realice la reparación del daño y se proteja al inocente[[16]](#footnote-16) contemplados en el Código Penal del Estado de México.

Conforme a lo anterior, es evidente que existe la obligación del **SUJETO OBLIGADO** de pronunciarse respecto de la información solicitada, pues al referir que “*no cuenta con los registros pertinentes para dar cumplimiento a la solicitud, por ser información que se coteja en otra área”* el solicitante de la información no se tiene claridad respecto de si genera, administra o posee la información solicitada, por lo que es necesario hacer referencia al **procedimiento de búsqueda que deben de seguir los Sujetos Obligados para localizar la información**, el cual se encuentra previsto en los artículos 160 y 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, mismo que es el siguiente:

1. Las Unidades de Transparencia garantizarán que las solicitudes de acceso a la información se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla -de acuerdo a las facultades, competencias y funciones-, con el objeto de que dichas áreas realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información requerida, y
2. Los sujetos obligados otorgaran acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes.

En el caso, se advierte que la Ley Orgánica Municipal del Estado de México establece:

**Artículo 52.-** Los **síndicos municipales** tendrán a su cargo la **procuración y defensa de los derechos e intereses del municipio**, en especial los de carácter patrimonial y la función de contraloría interna, la que, en su caso, **ejercerán conjuntamente con el órgano de control y evaluación que al efecto establezcan los ayuntamientos**.

El Bando Municipal de Tlalmanalco refiere que:

**ARTÍCULO 143**.- La Coordinación Jurídica es la unidad administrativa encargada de **asistir jurídica y legalmente así como representar en los litigios** al presidente municipal, a la síndico, al ayuntamiento y dependencias de la administración pública municipal en los juicios en los que estos sean parte, asi mismo brindara apoyo técnico a las áreas administrativas que así lo requieran.

Así, este Órgano Garante considera que el **SUJETO OBLIGADO** no cumplió con el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable, pues no gestionó la solicitud de información en las diversas unidades en donde pudiera obrar citada información, de manera enunciativa pueden ser archivo, la coordinación jurídica, la sindicatura; o cualquier área donde de acuerdo a sus facultades se cuente con la información solicitada.

Aunado a lo anterior, el artículo 1.8, fracción XIII, del Código Administrativo del Estado de México, establece que para que tenga validez, todo acto administrativo deberá resolver todos los puntos propuestos por los interesados; además, el Criterio de interpretación con clave de registro SO/002/2017, de la Segunda Época, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, precisa lo siguiente:

**Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la información.** De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de información.

Conforme al criterio referido, se logra vislumbrar que todo acto administrativo debe apegarse al **principio de exhaustividad**, entendiendo por éste que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos requeridos, lo cual en materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que, las respuestas que emitan los sujetos obligados, deben guardar una relación lógica con lo solicitado, analizando y decidiendo –de marea íntegra- sobre todos los puntos requeridos, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente.

En esa tesitura, se concluye que el **SUJETO OBLIGADO** no satisfizo el derecho de acceso a la información de **LA PARTE RECURRENTE**, al incumplir con la debida fundamentación y motivación **y con el principio de exhaustividad,** pues al no turnar la solicitud de información a todas las áreas que pudieran tener la información, éstas omitieron pronunciarse respecto a la información requerida, lo cual da como resultado que el agravio sea **FUNDADO.**

Ahora bien, se advierte que el solicitante fue omiso en señalar la temporalidad, por lo que se estará conforme al criterio orientador 03/2019 que señala:

**Periodo de búsqueda de la información.** En el supuesto de que el particular no haya señalado el periodo respecto del cual requiere la información, o bien, de la solicitud presentada no se adviertan elementos que permitan identificarlo, deberá considerarse, para efectos de la búsqueda de la información, que el requerimiento se refiere **al año inmediato anterior, contado a partir de la fecha en que se presentó la solicitud**.[[17]](#footnote-17)

Por tales circunstancias, se considera **fundado** el motivo de inconformidad, y en consecuencia modificar la respuesta entregada a efecto de que, para atender el requerimiento de información, el **SUJETO OBLIGADO** deberá realizar una búsqueda exhaustiva y razonable, en todos los archivos de las áreas competentes, a efecto de que proporcionen de ser procedente en versión pública, debiendo observar la actualización de reserva y en su caso, la excepción de la misma de los documentos en donde consten:

J. Denuncias que haya actualmente en mesa de responsabilidades en contra de las actuales autoridades municipales y servidores públicos del ayuntamiento, al cinco de septiembre de dos mil veintitrés, de procedimientos administrativos que hayan causado estado.

Es importante señalar que, para efecto de determinar la **procedencia de la entrega de las denuncias anunciadas respecto de procedimientos de responsabilidad administrativa**, el **SUJETO OBLIGADO** deberá considerar:

* 1. Si las denuncias se encuentran relacionadas con procedimientos en trámite o concluidos (que hayan causado estado).
  2. Como regla general, si forman parte de procedimientos en trámite, ya sea que estén relacionados con sanciones graves o no graves deberán considerarse como reservados.
  3. Como excepción a lo anterior, aun cuando se encuentren en trámite si actualizan algún supuesto del artículo 142 de la Ley de Transparencia local, no podrán reservarse.
  4. Para el caso de que las denuncias se encuentren en procedimientos concluidos que hayan causado estado deberá distinguir:

**4.1** Resolución condenatoria con sanción Grave, es información pública, en donde el nombre y la sanción deben permanecer expuestos.

**4.2** Resolución condenatoria con sanción NO Grave. Procede la elaboración de versión pública, respecto de los datos confidenciales del nombre, cargo, área de adscripción y cualquier dato que haga identificable al servidor público.

**4.3** Resolución absolutoria: Procede la elaboración de versión pública, respecto de los datos confidenciales del nombre, cargo, área de adscripción y cualquier dato que haga identificable al servidor público.

Lo anterior, con base en las disposiciones normativas siguientes:

**Asuntos en trámite.**

Se debe observar lo establecido por el artículo 140 de la Ley de Transparencia local, el cual establece:

*“****Artículo 140.*** *El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando por razones de interés público, ésta sea clasificada* ***como reservada****, conforme a los criterios siguientes:*

***I.*** *Comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;*

***II.*** *Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales;*

***III.*** *Se entregue a la Entidad expresamente con ese carácter o el de confidencialidad por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional;*

***IV.*** *Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física;*

***V.*** *Aquella cuya divulgación obstruya o pueda causar un serio perjuicio a:*

***1.*** *Las actividades de fiscalización, verificación, inspección, comprobación y auditoría sobre el cumplimiento de las Leyes; o*

***2.*** *La recaudación de las contribuciones.*

***VI.*** *Pueda causar daño u obstruya la prevención o persecución de los delitos, altere el proceso de investigación de las carpetas de investigación, afecte o vulnere la conducción o los derechos del debido proceso en los procedimientos judiciales o administrativos, incluidos los de quejas, denuncias, inconformidades, responsabilidades administrativas y resarcitorias en tanto no hayan quedado firmes o afecte la administración de justicia o la seguridad de un denunciante, querellante o testigo, así como sus familias, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;*

***VII.*** *La que contengan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;*

***VIII.******Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan quedado firmes****;*

***IX.*** *Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la Ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público;*

***X.******El daño que pueda producirse con la publicación de la información sea mayor que el interés público de conocer la información de referencia, siempre que esté directamente relacionado con procesos o procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes;***

***Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización, siempre que esté directamente relacionado con procesos o procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes; y***

***XI.*** *Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales” (Sic).*

En consecuencia, la reserva de la información implica una clasificación, la cual debe entenderse como el proceso mediante el cual el **SUJETO OBLIGADO** determina que la información en su poder actualizar alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad.

Por lo que, para el caso que nos ocupa, el **SUJETO OBLIGADO** debe realizar la prueba de daño correspondiente, de conformidad con lo establecido por el artículo 128, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, establece que a efecto de motivar la clasificación de información, se debe establecer las razones, motivos o circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que el caso encuadra en la descripción de la norma jurídica señala como fundamento, aplicando en todo momento una prueba de daño en términos del artículo 129, fracciones I, II y III, 134, párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, vigente, los cuales en lo que interesa son del tenor literal siguiente:

***“Artículo 128…***

*Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño…*

***Artículo 129.*** *En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, justificando que:*

***I.*** *La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable del perjuicio significativo al interés público o a la seguridad pública;*

***II.*** *El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda; y*

***III.*** *La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.*

***Artículo 134***

*…*

*La clasificación de información se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño****”*** *(Sic).*

Correlativo a lo anterior, la prueba de daño consiste en la argumentación fundada y motivada que deben realizar los sujetos obligados para acreditar que la divulgación de la información lesiona un interés jurídicamente protegido y que el daño que puede producir es mayor que el interés de conocer ésta y su validez, no depende de los medios de prueba que el sujeto obligado aporte, sino de la solidez del juicio de ponderación que se efectúe de acuerdo con las normas aplicables, lo anterior tiene sustento en la siguiente tesis[[18]](#footnote-18):

***“PRUEBA DE DAÑO EN LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SU VALIDEZ NO DEPENDE DE LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE EL SUJETO OBLIGADO APORTE.***

*De acuerdo con el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los lineamientos segundo, fracción XIII y trigésimo tercero, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, aprobados por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016, la prueba de daño es la argumentación fundada y motivada que deben realizar los sujetos obligados para acreditar que la divulgación de la información lesiona un interés jurídicamente protegido y que el daño que puede producir es mayor que el interés de conocer ésta. Para tal efecto, disponen que en la clasificación de la información pública (como reservada o confidencial), debe justificarse que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional; que ese riesgo supera el interés público general de que se difunda; y, que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. Así, la prueba de daño establece líneas argumentativas mínimas que deben cursarse, a fin de constatar que la publicidad de la información solicitada no ocasionaría un daño a un interés jurídicamente protegido, ya sea de índole estatal o particular. Por tanto, al tratarse de un aspecto constreñido al ámbito argumentativo, la validez de la prueba de daño no depende de los medios de prueba que el sujeto obligado aporte, sino de la solidez del juicio de ponderación que se efectúe en los términos señalados.”[[19]](#footnote-19)*

Con fundamento en los artículos 113 fracción IX de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública, Vigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información y 140 fracción IV y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el cual prevé como algunos de los **criterios de reserva de la información cuando: se obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa correspondiente; cuando afecte o vulnere la conducción o los derechos del debido proceso en los procedimientos administrativos**, incluidos los de quejas, denuncias, inconformidades, responsabilidades administrativas y resarcitorias en tanto no hayan quedado firmes o afecte la administración de justicia o la seguridad de un denunciante, querellante o testigo, así como sus familias; se vulnere la conducción de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan quedado firmes, disposiciones legales que son del tenor literal siguiente:

***Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública***

*Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:*

*…*

*IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa;*

***Vigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información***

*Vigésimo octavo. De conformidad con el artículo 113, fracción IX de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa correspondiente; para lo cual, se deberán acreditar los siguientes supuestos:*

*I. La existencia de un procedimiento de responsabilidad administrativa en trámite, y*

*II. Que la información se refiera a actuaciones, diligencias y constancias propias del procedimiento de responsabilidad.*

**Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios**

***Artículo 140.*** *El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando por razones de interés público, ésta sea clasificada como reservada, conforme a los criterios siguientes:*

***…***

***IV.*** *Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física;*

*…*

***VIII.*** *Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan quedado firmes;*

En tal contexto, la información requerida relacionada con procedimientos de probables responsabilidades administrativas **debe ser considerada como información reservada,** previo cumplimiento de todas y cada una de las formalidades establecidas para su clasificación, **lo anterior, resulta aplicable tanto a las investigaciones o procedimientos de responsabilidad administrativa originado por faltas administrativas no graves y las graves** siempre que se encuentre en trámite.

En suma a lo anterior, no se omite señalar que, es criterio del Pleno del máximo Tribunal que, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva el principio de presunción de inocencia, que a su vez se establece en los artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que hacen efectiva la presunción de inocencia que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, en tal contexto es un derecho fundamental de toda persona, sometida a un procedimiento administrativo sancionador, lo anterior tiene sustento en la Contradicción de Tesis, con registro digital: 2006590, la cual es del tenor literal siguiente:

***PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES.***

*El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; el cual se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos preceptos -porque tienden a especificar y a hacer efectiva la presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el numeral 1o. constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso.*

Por otro lado, no se omite señalar, que de conformidad con el artículo 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y el Trigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales, establecen que **no podrá invocarse con el carácter de reservada**, aquella información que se encuentre relacionada con posibles violaciones a derechos humanos delitos de lesa humanidad o actos de corrupción, conforme a lo siguiente:

***Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública***

***Artículo 115.*** *No podrá invocarse el carácter de reservado cuando:*

*I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o*

*II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables.*

***Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios***

***Artículo 142.*** *Bajo ninguna circunstancia podrá invocarse el carácter de reservado cuando:*

*I. Se trate de* ***violaciones graves de derechos humanos****, calificada así por autoridad competente;*

*II. Se trate de la* ***investigación de posibles violaciones graves de derechos humanos*** *aun cuando no exista pronunciamiento previo de autoridad competente, cuando se determine, a partir de criterios cuantitativos y cualitativos la trascendencia social de las violaciones;*

*III. Se trate de* ***delitos de lesa humanidad*** *conforme a los tratados ratificados por el Senado de la República, las resoluciones emitidas por organismos internacionales cuya competencia sea reconocida por el Estado Mexicano, así como en las disposiciones jurídicas aplicables; y*

*IV. Se trate de información relacionada con* ***actos de corrupción*** *de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.*

***LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS.***

*Trigésimo séptimo. No podrá invocarse el carácter de reservado de la información cuando:*

*I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos;*

*II. Se trate de delitos de lesa humanidad conforme a los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, las resoluciones emitidas por organismos internacionales cuya competencia sea reconocida por el Estado mexicano, así como en las disposiciones legales aplicables;*

*III. Se trate de información relacionada con actos de corrupción. Lo anterior, en función del uso o aprovechamiento indebido y excesivo de las facultades, funciones y competencias, en beneficio propio o de un tercero, por parte de un servidor público o de otra persona que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, y de acuerdo con las leyes aplicables y los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano; o*

*IV. Cuando se trate de información relativa a la asignación y ejercicio de los gastos de campañas, precampañas y gastos en general de partidos políticos con cuenta al presupuesto público, ni las aportaciones de cualquier tipo o especie que realicen los particulares sin importar el destino de los recursos aportados; lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley General de Partidos Políticos.*

Al respecto, derivado de la excepción establecida en los preceptos legales antes citados, resulta oportuno mencionar que ante tal supuesto, si la información de los **asuntos en trámite** que los originaron o que si se encuentran contenidos dentro de la investigación o procedimiento de responsabilidad administrativa es relativa a alguna de las fracciones de los artículos 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, **142** de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y Trigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; **no podrá invocarse con el carácter de clasificada.**

**Asuntos resueltos.**

En el caso, resulta conveniente aclarar que, si bien el solicitante requiere denuncias y quejas, lo cierto es que, los procedimientos resultantes pudieron ser resueltos en el periodo de búsqueda señalado por lo que se debe considerar lo siguiente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios se observa que:

***Artículo 192.*** *Las resoluciones se considerarán que han quedado firmes, cuando transcurridos los plazos previstos en la presente Ley, no se haya interpuesto en su contra recurso alguno, o bien, desde su emisión cuando no proceda contra ellas recurso o medio ordinario de defensa.*

Asimismo,confundamento en los artículos 53, párrafo primero de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, 27, párrafo cuarto, primera hipótesis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 53, párrafo primero de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México, en relación con los artículos 70 fracciones XVII y XVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 92 fracción XXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, los cuales señalan que las constancias de sanciones o de inhabilitación que se encuentren **firmes**, entendiéndose como el expediente que contiene la investigación o sustanciación del procedimiento de responsabilidad administrativa hasta su resolución por actos vinculados con faltas graves y las sanciones impuestas por faltas administrativas graves, serán del conocimiento público cuando éstas contengan impedimentos o inhabilitaciones para ser contratados como Servidores Públicos o como prestadores de servicios o contratistas del sector público, aunado a la obligación de publicar el listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción, disposiciones legales que son del tenor literal siguiente:

***Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.***

***“Artículo 53.*** *Las sanciones impuestas por faltas administrativas graves serán del conocimiento público cuando éstas contengan impedimentos o inhabilitaciones para ser contratados como Servidores públicos o como prestadores de servicios o contratistas del sector público, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.*

***Ley General de Responsabilidades Administrativas.***

***“27…***

*En el sistema nacional de Servidores Públicos y particulares sancionados de la Plataforma digital nacional se inscribirán y se harán públicas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y las disposiciones legales en materia de transparencia, las constancias de sanciones o de inhabilitación que se encuentren firmes en contra de los Servidores Públicos o particulares que hayan sido sancionados por actos vinculados con faltas graves en términos de esta Ley…”*

***Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México***

***“Artículo 53.*** *Las sanciones impuestas por faltas administrativas graves serán del conocimiento público cuando éstas contengan impedimentos o inhabilitaciones para ser contratados como servidores públicos o como prestadores de servicios o contratistas del sector público, en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios****”.***

***Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.***

***Artículo 70.*** *En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:*

***…***

***XVII.*** *La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto;*

***XVIII.*** *El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición;*

***Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.***

***Artículo 92.*** *Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público de manera permanente y actualizada de forma sencilla, precisa y entendible, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:*

***…***

***XXII.*** *El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición;*

En tal sentido, en el supuesto que los asuntos resueltos de procedimientos administrativo**s** se ajusten a las hipótesis establecidas en los artículos de referencia, es decir que **contengan resolución con sanción por responsabilidad administrativa con motivo de faltas administrativas graves, y la misma hayan causado estado,** **debe ser considerado como información pública,** por lo que la misma es susceptible de ser entregada la cual incluye el nombre de servidores públicos sancionados, las sanciones administrativas que haya sido objeto, la causa y la disposición legal, por lo que en tal caso, resulta procedente la entrega de la información derivada de la solicitud de acceso de referencia, siempre que dichas sanciones se encuentren firmes.

Correlativo a lo anterior, los artículos 53, párrafo segundo de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, 53, párrafo segundo de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 27, párrafo cuarto, segundo supuesto de la Ley General de Responsabilidades administrativas, señalan que los registros de las sanciones relativas a responsabilidades administrativas no graves, quedarán registradas para efectos de eventual reincidencia, pero no serán públicas, según lo siguiente:

***Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción***

***“Artículo 53…***

*Los registros de las sanciones relativas a responsabilidades administrativas no graves, quedarán registradas para efectos de eventual reincidencia, pero no serán públicas****...”***

***Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México***

***“Artículo 53…***

*Los registros de las sanciones relativas a responsabilidades administrativas no graves, quedarán registradas para efectos de eventual reincidencia, pero no serán públicas…”*

***Ley General de Responsabilidades Administrativas***

***“Artículo 27…***

*así como la anotación de aquellas abstenciones que hayan realizado las autoridades investigadoras o el Tribunal, en términos de los artículos 77 y 80 de esta Ley”.*

De los preceptos legales anteriores se pueden advertir dos supuestos: el primero con fundamento en los artículos 53, párrafo segundo de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, 53, párrafo segundo de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México, en la cual se advierte que respecto a expedientes que contienen procedimientos de responsabilidad administrativa originados por motivo de faltas administrativas no graves, en las que se haya determinado imponer alguna sanción, por determinación de la ley las mismas no son consideradas públicas.

Correlativo a lo anterior, con fundamento en el artículo 27, párrafo cuarto, segundo supuesto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se determina que los expedientes que contienen abstenciones derivadas de investigaciones o procedimientos de responsabilidad administrativa originados por faltas administrativas no graves, no se harán públicas.

Para el caso de los **resoluciones absolutorias, concluidas**, se procederá a su acceso en **versión pública**, protegiendo el **nombre, cargo y área de adscripción del Servidor Público absuelto** y aquellos datos personales que hagan identificable a una persona, toda vez que la información solicitada, se relaciona con servidores públicos en específico, los cuales al no haber recibido alguna sanción por posibles responsabilidades, se procede a clasificar como **confidencial** el nombre y cargo del servidor público, al poder causar un perjuicio a la vida privada de estos.

Bajo este contexto, se considera que en el caso de que la información se encuentre en alguno de los supuestos antes establecidos, el **SUJETO OBLIGADO** deberá clasificar la información, emitiendo en su caso el acuerdo correspondiente**,** tomando en consideración que, de proporcionar el nombre de los servidores públicos relacionados al procedimiento de responsabilidades administrativas **por faltas no graves**, podría afectar su honor, buen nombre y su imagen.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido como derechos fundamentales de las personas, el derecho a la intimidad y a la propia imagen, en el siguiente criterio:

*“****DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA****. Dentro de los derechos personalísimos se encuentran necesariamente comprendidos el derecho a la intimidad y a la propia imagen, así como a la identidad personal y sexual; entendiéndose por el primero, el derecho del individuo a no ser conocido por otros en ciertos aspectos de su vida y, por ende, el poder de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona, familia, pensamientos o sentimientos; a la propia imagen, como aquel derecho de decidir, en forma libre, sobre la manera en que elige mostrarse frente a los demás; a la identidad personal, entendida como el derecho de todo individuo a ser uno mismo, en la propia conciencia y en la opinión de los demás, es decir, es la forma en que se ve a sí mismo y se proyecta en la sociedad, de acuerdo con sus caracteres físicos e internos y sus acciones, que lo individualizan ante la sociedad y permiten identificarlo; y que implica, por tanto, la identidad sexual, al ser la manera en que cada individuo se proyecta frente a sí y ante la sociedad desde su perspectiva sexual, no sólo en cuanto a sus preferencias sexuales sino, primordialmente, en cuanto a cómo se percibe él, con base en sus sentimientos y convicciones más profundos de pertenencia o no al sexo que legalmente le fue asignado al nacer y que, de acuerdo a ese ajuste personalísimo en el desarrollo de cada individuo, proyectará su vida en todos los ámbitos, privado y público, por lo que al ser la sexualidad un elemento esencial de la persona y de su psique, la autodeterminación sexual forma parte de ese ámbito propio y reservado de lo íntimo, la parte de la vida que se desea mantener fuera del alcance de terceros o del conocimiento público. Por consiguiente, al constituir derechos inherentes a la persona, fuera de la injerencia de los demás, se configuran como derechos de defensa y garantía esencial para la condición humana, ya que pueden reclamarse tanto en defensa de la intimidad violada o amenazada, como exigir del Estado que prevenga la existencia de eventuales intromisiones que los lesionen por lo que, si bien no son absolutos, sólo por ley podrá justificarse su intromisión, siempre que medie un interés superior.”*

En ese sentido, se puede hacer notar el derecho de todo individuo a no ser conocido por otros en ciertos aspectos de su vida y, por ende, el poder de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona (derecho a la intimidad), aunado al derecho a la propia imagen es el derecho de decidir, de forma libre, sobre la manera en que elige mostrarse frente a los demás.

Por lo expuesto, se desprende que dar a conocer el nombre del servidor público de un procedimiento de responsabilidad administrativa no grave, constituye información confidencial que afecta su esfera privada, puesto que podría generar una percepción negativa de este, ocasionando un perjuicio en su honor, intimidad y buena imagen, pues como se precisó la afectación es para el propio servidor público, situación que no afecta a terceros.

Así, respecto a la información que puede dar cuenta de lo solicitado, podría contener datos confidenciales; por lo que, en su caso, deberá entregarse en versión pública en la que se eliminen estos, junto con el acuerdo del Comité de Transparencia, en el que funde y motive la eliminación de la información, de conformidad con lo establecido en los artículos 49, fracciones II y VIII, 128, 132, fracción I, 138, 143 y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de México y Municipios.

Ahora bien, para efecto de **determinar la procedencia de la entrega de las denuncias anunciadas respecto de procedimientos de responsabilidad penal**, el **SUJETO OBLIGADO** deberá considerar:

Que el artículo 218 del **Código Nacional de Procedimientos Penales**, establece que todas las actuaciones de investigación en trámite, realizadas por el Ministerio Público, son reservados, según se advierte:

**Artículo 218. Reserva de los actos de investigación** Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.

…

Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme.

El artículo 113 fracción XII de la **Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública**, dispone que se trata de información reservada, por tratarse de carpeta de investigación en trámite.

“Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

…

XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y …”

Por su parte, en el artículo 140, fracción IX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

“Artículo 140. El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando por razones de interés público, ésta sea clasificada como reservada, conforme a los criterios siguientes:

…

IX. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la Ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público; …”

En ese orden de ideas, el Trigésimo primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas., prevé lo siguiente:

“**Trigésimo primero**. De conformidad con el artículo 113, fracción XII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que forme parte de las **averiguaciones previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación**, durante la cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su equivalente reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.”

Aunado a lo anterior, el citado Código Nacional de Procedimientos Penales establece que:

**Artículo 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad** En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.

**Artículo 106. Reserva sobre la identidad** En ningún caso se podrá hacer referencia o comunicar a terceros no legitimados la información confidencial relativa a los datos personales de los sujetos del procedimiento penal o de cualquier persona relacionada o mencionada en éste.

Toda violación al deber de reserva por parte de los servidores públicos, será sancionada por la legislación aplicable.

En los casos de personas sustraídas de la acción de la justicia, se admitirá la publicación de los datos que permitan la identificación del imputado para ejecutar la orden judicial de aprehensión o de comparecencia.

Atendiendo a las disposiciones anteriores, podrá clasificarse como reservada la información que se encuentre contenida dentro de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público; es decir de aquella que forme parte de las averiguaciones previas, que resulte de la etapa de investigación, esto es, la reunión de indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación del imputado y la reparación del daño, la cual incluye todas las actuaciones, diligencias y dictámenes emitidos por este.

En consecuencia, respecto de la entrega de las **denuncias penales** presentadas por el **SUJETO OBLIGADO**, con excepción de las que se relacionen con los supuestos previstos en el artículo 142 de la Ley de la materia, así como las denuncias relacionadas con procedimientos concluidos firmes absolutorios; y, respecto de los procedimientos concluidos en los que se hubiera establecido una condena, se deberá proceder a la **entrega en versión pública.**

**Resultado de Auditorías**

Como último punto se observa que la ahora **PARTE RECURRENTE** solicitó:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lo solicitado | Lo entregado | Observación |
| 7 | Copia de resultados de las auditorías realizadas al Ayuntamiento | La Tesorería Municipal refiere que no genera información por ese concepto.  El Contralor Interno Municipal informa que no cuenta con los registros pertinentes para dar cumplimiento a la solicitud, por ser información que se coteja en otra área. | NO COLMA. |

Primeramente, al advertirse que la solicitante fue omisa en señalar la temporalidad de la información solicitada, se estará a lo referido anteriormente conforme al criterio orientador INAI 3/2019, es decir, se tendrá como fecha aquella anterior a un año a la fecha de la solicitud, esto es del cinco de septiembre de dos mil veintidós al cinco de septiembre de dos mil veintitrés.

Establecido lo anterior, la Ley de Transparencia local en el artículo 92, fracción XXVIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, a saber:

**“Artículo 92**. Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público de manera permanente y actualizada de forma sencilla, precisa y entendible, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:

…

**XXVIII.** Los **informes de resultados de las auditorías** al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan;

Ahora bien, para dar cumplimiento a dicha obligación los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los Sujetos Obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia señalan que los Sujetos Obligados deberán publicar la información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.

Asimismo, los Lineamientos señalan que las auditorías **son verificaciones a fin de comprobar el cumplimiento de objetivos fiscales;** sirven para responsabilizar a los Sujetos Obligados y/o servidores públicos, integrantes y/o miembros, así como toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad en los Sujetos Obligados, sobre el manejo de los recursos presupuestarios que utilizan para la realización de sus funciones y la prestación de servicios hacia la ciudadanía, de acuerdo con los documentos normativos que correspondan.

Los resultados de estas verificaciones, mismos que emiten los órganos fiscalizadores, deben ser publicados por el Sujeto Obligado, así como las aclaraciones correspondientes aun cuando su seguimiento no esté concluido. El sujeto obligado deberá ordenar la información en dos rubros:

* Auditorías Internas

• Auditorías Externas

Las *auditorías internas* se refieren a las revisiones **realizadas por los órganos internos de control, contralorías, comisiones u órganos de vigilancia**, según corresponda, de cada Sujeto Obligado, los cuales actúan a lo largo de todo el año o durante la gestión del sujeto.

Las *auditorías externas* se refieren a las revisiones realizadas por el organismo fiscalizador encargado de la entidad que corresponda, así como por las organizaciones, instituciones, consultoras u homólogas externas que el sujeto obligado haya contratado para tal finalidad. Además, en el rubro correspondiente a esta fracción se publicarán los datos obtenidos de las revisiones hechas por la Auditoría Superior de la Federación, ASF, independientemente del ámbito del Sujeto Obligado.

Es importante destacar que la ASF tiene la facultad de revisar las operaciones señaladas en la Cuenta Pública correspondiente de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, descentralizados y desconcentrados de la Administración Pública Federal e, inclusive, de particulares que ejerzan recursos federales, así como de entidades federativas, delegaciones y municipios que utilicen recursos federales transferidos y las garantías que en su caso otorgue el Gobierno Federal respecto a empréstitos de los estados y municipios.

Además de ordenar la información por rubro (internas y externas), ésta deberá organizarse por tipo de auditoría; por ejemplo: de cumplimiento financiero, de inversión física, forense, de desempeño, de gasto federalizado, financiera de legalidad, programático presupuestal o la que corresponda; en su caso, por los informes entregados por la instancia que auditó al sujeto obligado, incluidos los informes individuales de auditoría, el Informe General Ejecutivo a la Cámara de Diputados que en su caso haya realizado la ASF y lo derivado de las investigaciones realizadas y las responsabilidades procedentes.

Ya que los órganos fiscalizadores promueven acciones con el fin de que los Sujetos Obligados corrijan los errores, evalúen la posibilidad de generar cambios a su interior o realicen cualquier labor de mejora que derive de los resultados obtenidos de las revisiones, todos los Sujetos Obligados deberán publicar dichas acciones impuestas por estos órganos con base en lo establecido en la ley que corresponda.

La información deberá publicarse y actualizarse trimestralmente a más tardar 30 días naturales después de concluido el trimestre y se deberá mantener publicada en el sitio de Internet, la información generada en el ejercicio en curso y la correspondiente a los tres ejercicios anteriores.

Para la publicación de la información se deben observar los Criterios sustantivos de contenido, los Criterios adjetivos de actualización y los Criterios adjetivos de contabilidad, y los Criterios adjetivos de formato que establecen los Lineamientos Técnicos Generales.

Para el tema que nos ocupa es indispensable traer a contexto el formato mediante el cual se debe organizar la información publicada, en el que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido:

Tabla

Descripción generada automáticamenteTabla, Calendario

Descripción generada automáticamente

Tabla, Calendario

Descripción generada automáticamente

Como puede observarse, la información que debe publicarse en el portal de internet, debe incluir, entre otros datos, el ejercicio; periodo que se informa; **ejercicio auditado; rubro:** auditoria interna o externa; **tipo de auditoría con base en la clasificación hecha por el órgano fiscalizador correspondiente**; número de auditoría o nomenclatura que la identifique; **órgano que realizó la revisión o auditoría;** objetivo(s) de la realización de la auditoría; rubros sujetos a revisión; número de oficio o documento de notificación de resultados; **hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados;** por rubro sujeto a revisión, el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive; **hipervínculo a los informes finales, de revisión y/o dictamen si es un documento publicado en formato PDF, en el que se difundan firmas;** hipervínculo al Programa anual de auditoría que corresponda, etcétera.

Así, no obstante que la información solicitada debe publicarse en el portal de internet, el **SUJETO OBLIGADO** a través de la Contraloría Interna, área competente para atender la solicitud, se limitó en informar que no cuenta con los registros pertinentes para dar cumplimiento a la solicitud.

Por lo que es procedente modificar la respuesta entregada y ordenar al **SUJETO OBLIGADO** realice una búsqueda y haga entrega de ser procedente en versión pública de:

K. Los resultados de auditorías externas e internas realizadas al Ayuntamiento del 5 de septiembre de dos mil veintidós al cinco de septiembre de dos mil veintitrés.

**d) Versión pública**

Para el caso de que el o los documentos de los cuales se ordena su entrega contengan datos personales susceptibles de ser testados, deberán ser entregados en **versión pública**, pues el derecho de acceso a la información tiene como limitante el respeto a la intimidad y a la vida privada de las personas, es por ello que este Instituto debe cuidar que los datos personales que obren en poder de los Sujetos Obligados sean protegidos y únicamente se den a conocer aquéllos que abonen a la rendición de cuentas y a la transparencia en el ejercicio de las atribuciones que tienen conferidas. De este modo, en armonía entre los principios constitucionales de máxima publicidad y de protección de datos personales, la ley permite la elaboración de versiones públicas en las que se suprima aquella información relacionada con la vida privada de los particulares.

A este respecto, los artículos 3, fracciones IX, XX, XXI y XLV; 51 y 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios establecen:

***“Artículo 3.*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

***IX.******Datos personales:*** *La información concerniente a una persona, identificada o identificable según lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México;*

***XX.******Información clasificada:*** *Aquella considerada por la presente Ley como reservada o confidencial;*

***XXI.******Información confidencial****: Se considera como información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos;*

***XLV. Versión pública:*** *Documento en el que se elimine, suprime o borra la información clasificada como reservada o confidencial para permitir su acceso.*

***Artículo 51.*** *Los sujetos obligados designaran a un responsable para atender la Unidad de Transparencia, quien fungirá como enlace entre éstos y los solicitantes. Dicha Unidad será la encargada de tramitar internamente la solicitud de información* ***y tendrá la responsabilidad de verificar en cada caso que la misma no sea confidencial o reservada.*** *Dicha Unidad contará con las facultades internas necesarias para gestionar la atención a las solicitudes de información en los términos de la Ley General y la presente Ley.*

***Artículo 52.*** *Las solicitudes de acceso a la información y las respuestas que se les dé, incluyendo, en su caso, la información entregada, así como las resoluciones a los recursos que en su caso se promuevan serán públicas, y de ser el caso que contenga datos personales que deban ser protegidos se podrá dar su acceso en su versión pública, siempre y cuando la resolución de referencia se someta a un proceso de disociación, es decir, no haga identificable al titular de tales datos personales.”* (Énfasis añadido)

Así, los datos personales que obren en poder de los Sujetos Obligados deben estar protegidos, adoptando las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas necesarias para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales, considerando además, que conforme al principio de finalidad, todo tratamiento de datos personales que se efectúe deberá estar justificado en la Ley, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 22, párrafo primero, relacionado con el 38 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, los cuales se transcriben para mayor referencia:

***“Artículo 22.*** *Todo tratamiento de datos personales que efectúe el responsable deberá estar justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable les confiera.*

***Artículo 38.*** *Con independencia del tipo de sistema y base de datos en el que se encuentren los datos personales o el tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable adoptará, establecerá, mantendrá y documentará las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales, a través de controles y acciones que eviten su daño, alteración, pérdida, destrucción, o el uso, transferencia, acceso o cualquier tratamiento no autorizado o ilícito, de conformidad con lo dispuesto en los lineamientos que al efecto se expidan.****”***

De este modo, en armonía entre los principios constitucionales de máxima publicidad y de protección de datos personales, la Ley de la materia permite la elaboración de versiones públicas en las que se suprima aquella información relacionada con la vida privada de los particulares toda vez que ésta tiene por objeto proteger datos personales, entendiéndose por tales, aquéllos que hacen identificable a una persona.

Lo anterior es así, en virtud de que toda la información relativa a una persona física o jurídico colectiva que le pueda hacer identificada o identificable constituye un dato personal en términos del artículo 4, fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios; por consiguiente, se trata de información confidencial que debe ser protegida por **EL SUJETO OBLIGADO,** por lo que, todo dato personal susceptible de clasificación debe ser protegido.

La finalidad de la versión pública es salvaguardar la vida, integridad, seguridad, patrimonio y privacidad de las personas; de tal manera que, todo aquello que no tenga por objeto proteger lo anterior, es susceptible de ser entregado. En otras palabras, la protección de datos personales es una derivación del derecho a la intimidad.

Asimismo, es importante señalar que dicha clasificación se tiene que efectuar mediante la forma y formalidades que la ley de la materia impone; es decir, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado de su Comité de Transparencia, en términos de los artículos 49, fracción VIII y 132, fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, así como los numerales Segundo, fracción XVIII, y del Cuarto al Décimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, que literalmente expresan:

***Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios***

***“Artículo 49.*** *Los Comités de Transparencia tendrán las siguientes atribuciones:*

***VIII.*** *Aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información;*

***Artículo 132.*** *La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:*

***I.*** *Se reciba una solicitud de acceso a la información;*

***II.*** *Se determine mediante resolución de autoridad competente; o*

***III.*** *Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en esta Ley.****”***

***“Segundo. -*** *Para efectos de los presentes Lineamientos Generales, se entenderá por:*

***XVIII.******Versión pública:*** *El documento a partir del que se otorga acceso a la información, en el que se testan partes o secciones clasificadas, indicando el contenido de éstas de manera genérica, fundando y motivando la reserva o confidencialidad, a través de la resolución que para tal efecto emita el Comité de Transparencia.*

***Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información***

***Cuarto.*** *Para clasificar la información como reservada o confidencial, de manera total o parcial, el titular del área del sujeto obligado deberá atender lo dispuesto por el Título Sexto de la Ley General, en relación con las disposiciones contenidas en los presentes lineamientos, así como en aquellas disposiciones legales aplicables a la materia en el ámbito de sus respectivas competencias, en tanto estas últimas no contravengan lo dispuesto en la Ley General.*

*Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera estricta, las excepciones al derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia.*

***Quinto.*** *La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de clasificación previstos en la Ley General, la Ley Federal y leyes estatales, corresponderá a los sujetos obligados, por lo que deberán fundar y motivar debidamente la clasificación de la información ante una solicitud de acceso o al momento en que generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia, observando lo dispuesto en la Ley General y las demás disposiciones aplicables en la materia.*

***Sexto.*** *Se deroga.*

***Séptimo.*** *La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:*

***I.*** *Se reciba una solicitud de acceso a la información;*

***II.*** *Se determine mediante resolución del Comité de Transparencia, el órgano garante competente, o en cumplimiento a una sentencia del Poder Judicial; o*

***III.*** *Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley General, la Ley Federal y las correspondientes de las entidades federativas.*

*Los titulares de las áreas deberán revisar la información requerida al momento de la recepción de una solicitud de acceso, para verificar, conforme a su naturaleza, si encuadra en una causal de reserva o de confidencialidad.*

***Octavo.*** *Para fundar la clasificación de la información se debe señalar el artículo, fracción, inciso, párrafo o numeral de la ley o tratado internacional suscrito por el Estado mexicano que expresamente le otorga el carácter de reservada o confidencial.*

*Para motivar la clasificación se deberán señalar las razones o circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.*

*En caso de referirse a información reservada, la motivación de la clasificación deberá comprender el análisis de la prueba del daño a que hace referencia el artículo 104 de la Ley General, en relación con el artículo trigésimo tercero de los presentes lineamientos, así como las circunstancias que justifican el establecimiento de determinado plazo de reserva.*

***Noveno.*** *En los casos en que se solicite un documento o expediente que contenga partes o secciones clasificadas, los titulares de las áreas deberán elaborar una versión pública fundando y motivando la clasificación de las partes o secciones que se testen, siguiendo los procedimientos establecidos en el Capítulo IX de los presentes lineamientos.*

***Décimo.*** *Los titulares de las áreas, deberán tener conocimiento y llevar un registro del personal que, por la naturaleza de sus atribuciones, tenga acceso a los documentos clasificados. Asimismo, deberán asegurarse de que dicho personal cuente con los conocimientos técnicos y legales que le permitan manejar adecuadamente la información clasificada, en los términos de la Ley General de Archivo, Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos y demás normatividad aplicable.*

*En ausencia de los titulares de las áreas, la información será clasificada o desclasificada por la persona que lo supla, en términos de la normativa que rija la actuación del sujeto obligado.*

***Décimo primero.*** *En el intercambio de información entre sujetos obligados para el ejercicio de sus atribuciones, los documentos que se encuentren clasificados deberán llevar la leyenda correspondiente de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VIII de los presentes lineamientos.****”***

Consecuentemente, se destaca que la versión pública que elabore **EL SUJETO OBLIGADO** debe cumplir con las formalidades exigidas en la Ley, por lo que para tal efecto emitirá el **Acuerdo del Comité de Transparencia** en términos de los artículos 122 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, con el cual sustentará la clasificación de datos y con ello la "versión pública" de los documentos materia de la solicitud, ya que de no hacerlo implica que lo entregado no es legal ni formalmente una versión pública, sino más bien una documentación ilegible, incompleta o tachada; pues no se señalan las razones por las que no se aprecian determinados datos -ya sea porque se testan o suprimen- lo cual deja al solicitante en estado de incertidumbre, al no conocer o comprender porque no aparecen en la documentación respectiva, es decir, si no se exponen de manera puntual las razones, se estaría violentando desde un inicio el derecho de acceso a la información del solicitante.

Es importante señalar que, para el caso en concreto, se deben tomar en consideración los siguientes criterios respecto a la información que debe ser, o no, clasificada como confidencial:

Debe considerarse que tiene carácter de confidencial el **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) que no sean de proveedores**, cuenta bancaria, la Clave Única de Registro de Población (CURP), domicilio particular, teléfono particular, el nombre de las personas físicas que no tengan la calidad de servidor público o aquellos que no reciban recursos públicos, entre otros considerados como datos personales en términos de la normatividad aplicable.

Referente al **QR, folio fiscal, número de serie del certificado del emisor, sello digital Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), sello digital del SAT, Cadena Original del SAT, número de serie del certificado del SAT**, es preciso señalar que si de la secuencia de números y letras, se advierte el Registro Federal de Contribuyentes o una Clave Única de Registro de Población, que pueda hacer identificable al titular del dato personal, no puede tenerse como dato personal y por ende es información considerada confidencial. Por el contrario, debe considerarse que esta información incluida en los documentos fiscales, constituyen un elemento adicional que permite a cualquier persona verificar la legitimidad del documento, por sí solos no contienen datos personales susceptibles de clasificación, ya que no hacen identificable al titular, pues dichos datos sólo son de utilidad de manera directa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y si bien, en un momento dichas cadenas derivan información personal de los contribuyentes, esta se encuentra encriptada como se verá a continuación.

• **Código Bidimensional o QR.**

En principio, resulta necesario señalar que los comprobantes fiscales digitales por Internet, deben de incluir un código bidimensional conforme al formato QR Code (Quick Response Code), el cual contiene el Registro Federal de Contribuyentes del receptor, del emisor, o de ambos; lo anterior, conforme al Anexo 20 de la Segunda Resolución de modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2017, localizada en la página electrónica <http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5492254&fecha=28/07/2017>. Incluso con la captura de dicho código, a través de la aplicación móvil del Servicio de Administración Tributaria, permite el acceso al Registro Federal de Contribuyentes, como del Sujeto Obligado, como del proveedor, persona física o moral.

En ese orden de ideas, toda vez que el código bidimensional sólo permite el acceso al Registro Federal de Contribuyentes del proveedor y del Sujeto Obligado, los cuales guardan la naturaleza pública, se considera que no se actualiza la causal de clasificación prevista en el artículo 143, fracción I de la Ley de la materia.

**Folio Fiscal**

Por lo que hace Folio Fiscal, cabe precisar que conforme al ANEXO 20 de la Segunda Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil diecisiete, el folio fiscal se conforma de treinta seis caracteres alfanuméricos; además, que conforme al documento denominado “Cómo ubicar el Folio Fiscal en una factura”, el dato se ubica dentro de los datos del emisor o en el recuadro de los datos de identificación del comprobante fiscal. Es un número consecutivo contenido en los comprobantes fiscales digitales, compuesto por 5 grupos de números y letras separados por guiones, tal como se muestra a continuación:

Texto

Descripción generada automáticamente

En ese contexto, el folio fiscal, no contiene datos personales del emisor y tampoco se puede obtener información confidencial con el mismo, pues solamente es un identificador del emisor, del cual su transparencia ayuda a legitimar que el documento cumple con todos los requisitos establecidos en la normatividad aplicable, sin necesidad algún dato personal, por lo que, **no se actualiza la clasificación**, en términos del artículo 143, fracción I de la Ley de la materia.

**Cadenas originales y sellos.**

**Las cadenas originales y sellos** que se agregan a las facturas, tienen una secuencia de generación, determinados con base en el ANEXO 20 de la Segunda Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil diecisiete, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil diecisiete, que precisa los datos de los que se componen los elementos de seguridad y se puntualiza que dicha información está encriptada.

“Elementos utilizados en la generación de Sellos Digitales:

• Cadena Original, el elemento a sellar, en este caso de un comprobante fiscal digital a través de Internet.

• Certificado de Sello Digital y su correspondiente clave privada.

• Algoritmos de criptografía de clave pública para firma electrónica avanzada.

• Especificaciones de conversión de la firma electrónica avanzada a Base 64.

Para la generación de sellos digitales se utiliza criptografía de clave pública aplicada a una cadena original.

Criptografía de la Clave Pública

La criptografía de Clave Pública se basa en la generación de una pareja de números muy grandes relacionados íntimamente entre sí, de tal manera que una operación de encripción sobre un mensaje tomando como clave de encripción a uno de los dos números, produce un mensaje alterado en su significado que solo puede ser devuelto a su estado original mediante la operación de desencripción correspondiente tomando como clave de desencripción al otro número de la pareja.”

Es decir, por sí solos las cadenas originales y los sellos originales no contienen datos personales confidenciales, por lo que se considera que **no actualizan en supuesto de confidencialidad** previsto en el artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y, por el contrario, son información que permite corroborar la legitimidad de la factura, de ser el caso, por lo que guardan el carácter de público.

**Número de serie del emisor y/o CSD y número de certificado del SAT**

Por otra parte, por lo que hace **al número de serie de los certificados de Sello Digitales del emisor y del Servicio de Administración Tributaria,** el ANEXO 20 de la Segunda Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil diecisiete, precisa que dichos datos se conforman por veinte caracteres numéricos; dicha situación se robustece con el ejemplo localizado en el documento denominado “Cómo ubicar el Folio Fiscal en una factura”, emitido por el Instituto Nacional Electoral, en la página <https://portalanterior.ine.mx/archivos2/tutoriales/sistemas/ApoyoInstitucional/SIF/docs/candidatos/folioFiscalFactura.pdf>, en la cual se advierte que únicamente se encuentra conformado por números, se muestra a continuación:

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Como se logra observar, los números de serie del certificado de sello digital no contiene datos personales y con dichos dígitos tampoco se puede obtener información de carácter confidencial, por lo que, **tampoco actualizan la causal de clasificación**, establecida en el artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. **Máxime que permite corroborar la legitimidad a los CDFI, pues amparan la utilización de los certificados de sellos digitales válidos.**

Asimismo, el artículo 2°, fracción III, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece que los actos y las operaciones que regula esta Ley General, se regirán por los **usos bancarios y mercantiles**, es así que, a manera de contextualización la cuenta bancaria y estado de cuenta se definen como:

**Cuenta bancaria:** Una cuenta bancaria es un registro que mantiene un banco, en el que guarda dinero y contabiliza todas las entradas y salidas de efectivo, así como los créditos en curso, inversiones y productos relacionados.

En relación a los **números de cuenta bancarias** del **Sujeto Obligado**, en donde se transfieren recursos públicos, **son considerados como información pública**, pues su difusión favorece la rendición de cuentas al transparentar la forma en que se administrar los recursos públicos; situación que se robustece con el Criterio 11/17, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que a la letra precisa:

“**Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de sujetos obligados que reciben y/o transfieren recursos públicos**, son información pública. La difusión de las cuentas bancarias y claves interbancarias pertenecientes a un sujeto obligado favorece la rendición de cuentas al transparentar la forma en que se administran los recursos públicos, razón por la cual no pueden considerarse como información clasificada.”

Por otro lado, el Criterio 11/17 establece que el número de cuenta de particulares es información confidencial, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que a la letra precisa:

**CRITERIO: 10/17.- Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales privadas.**

El número de cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria de particulares es información confidencial, al tratarse de un conjunto de caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros para identificar las cuentas de sus clientes, a través de los cuales se puede acceder a información relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones; por tanto, constituye información clasificada con fundamento en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**El Registro Federal de Contribuyentes.**

El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es una clave alfanumérica que se compone de trece (13) caracteres. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), los dos primeros caracteres, corresponden al apellido paterno, el tercero a la inicial del apellido materno y el cuarto al primero nombre, seguido del año de nacimiento, mes y día, los tres últimos dígitos son la homoclave que es asignada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Las personas físicas obligadas a presentar declaraciones o expedir comprobantes fiscales, deberán solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. La clave del RFC es el medio por el cual el Servicio de Administración Tributaria exige y vigila el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, además que identifica como contribuyentes a las personas físicas o morales en nuestro país.

Del mismo modo, el Registro Federal de Contribuyentes permite tener acceso a programas sociales o becas, obtención de créditos y apoyos, apertura cuentas bancarias, participar en Afores, e incluso es un requisito indispensable para realizar el trámite de ingreso a un empleo.

De lo anteriormente expuesto, el Registro Federal de Contribuyentes, es un dato personal concerniente a una persona física identificada o identificable, cuya exposición vulneraría la esfera privada del servidor público, e incluso pudiese dar pauta a la configuración de un delito fiscal.

En el mismo sentido, resulta aplicable el Criterio 19/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, y Protección de Datos Personales, en el cual se señala lo siguiente:

**REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) DE PERSONAS FÍSICAS.** “El RFC es una clave de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial.”

**La Clave Única de Registro de Población.**

La Clave Única de Registro de Población (CURP) según lo establecido en el Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población, la CURP es un elemento que permite registrar de forma individual a las o los mexicanos, así como a los extranjeros que se encuentren en condiciones de estancia regular en el país o en trámite de ésta, se integra por dieciocho (18) caracteres, los cuales son:

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Es entonces que a partir de los datos básicos de la persona (nombre, apellido, sexo, fecha y lugar de nacimiento) encontrados en los documentos probatorios de identidad es que se genera la CURP, la cual tiene la particularidad de asegurar una correspondencia entre claves y personas.

Entre las características de la CURP, se encuentra:

***Composición.*** *Alfanumérica.*

***Longitud.***  *18 caracteres.*

***Naturaleza.*** *Biunívoca.*

***Universalidad.*** *Se asigna a todas las personas que conforman la población.*

***Verificabilidad. En su estructura existen elementos que permiten comprobar si fue conformada correctamente o no, así como fecha de nacimiento, sexo, identificad federativa de nacimiento y las primeras composiciones de la clave, conformadas por la letra inicial y primera vocal interna del primer apellido, la letra inicial del segundo apellido y la primera letra del nombre.***

Del mismo modo, los Lineamientos en comento señalan en su artículo Décimo Tercero, “Manejo de la Información que la información contenida en la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población (BNDCURP), tiene carácter de confidencial, por lo que su tratamiento debe ser acorde con la legislación aplicable y vigente en materia de transparencia y acceso a la información pública, y protección de datos personales.

Es entonces que, de lo anterior, se desprende que la Clave Única de Registro de Población es un dato personal confidencial, ya que por sí releva información personal de su titular, y su exposición únicamente vulneraría la esfera privada del mismo, aunado a que no guarda relación con el desempeño profesional o laboral de un individuo ni con el ejercicio de recursos públicos.

Ante ello, resulta aplicable el Criterio 18/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que a la literalidad señala:

**CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP). “**La Clave Única de Registro de Población se integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de la misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen información que distingue plenamente a una persona física del resto de los habitantes del país, por lo que la CURP está considerada como información confidencial.”

**La clave de identificación del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.**

El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), es un organismo público descentralizo, con personalidad jurídica y órganos de gobierno propios, el cual otorgará las prestaciones y servicios que establece la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios.

El artículo 9 de la Ley citada en el párrafo anterior, señala que el Instituto expedirá a los derechohabientes documento de identificación para facilitarles el acceso a las prestaciones que les corresponden conforme a Ley, dicho medio de identificación se materializa a través de una credencial expedida por el Instituto a sus derechohabientes, la cual será de naturaleza personal e intransferible y la cual deberá ser presentada siempre que se requiera un servicio de salud y demás prestaciones que brinda el organismo.

Entre los elementos que integra la credencial expedida se encuentra la Clave ISSEMyM, la cual permite identificar al servidor público que actualmente labora o laboró en alguna institución pública y que tenga vigente su derecho a recibir las prestaciones.

Como se advierte, este número asignado a los derechohabientes en un dato personal que permite la identificación de la persona que goza de las prestaciones que otorga la Institución y de qué prestaciones ha hecho uso. Es de destacar, que el Derecho de Seguridad Social es un derecho conferido a los trabajadores, cuyo objetivo es garantizar la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios, áreas que pertenecen a la esfera privada del individuo y que, su exposición no abona a la transparencia ni rendición de cuentas o el correcto ejercicio de las funciones desempeñadas por los servidores públicos, por el contrario su exhibición si provoca una transgresión a la vida pública e intimidad de la persona.

**Préstamos o descuentos de carácter personal.**

Para entender los límites y alcances de esta restricción, es oportuno traer a colación lo establecido por el artículo 84 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, el cual señala que:

**“ARTÍCULO 84.** Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al sueldo de los servidores públicos por concepto de:

**I.** Gravámenes fiscales relacionados con el sueldo;

**II.** Deudas contraídas con las instituciones públicas o dependencias por concepto de anticipos de sueldo, pagos hechos con exceso, errores o pérdidas debidamente comprobados;

**III.** Cuotas sindicales;

**IV.** Cuotas de aportación a fondos para la constitución de cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que el servidor público hubiese manifestado previamente, de manera expresa, su conformidad;

**V.** Descuentos ordenados por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, con motivo de cuotas y obligaciones contraídas con éste por los servidores públicos;

**VI.** Obligaciones a cargo del servidor público con las que haya consentido, derivadas de la adquisición o del uso de habitaciones consideradas como de interés social;

**VII.** Faltas de puntualidad o de asistencia injustificadas;

**VIII.** Pensiones alimenticias ordenadas por la autoridad judicial; o

**IX.** Cualquier otro convenido con instituciones de servicios y aceptado por el servidor público.

El monto total de las retenciones, descuentos o deducciones no podrá exceder del 30% de la remuneración total, excepto en los casos a que se refieren las fracciones IV, V y VI de este artículo, en que podrán ser de hasta el 50%, salvo en los casos en que se demuestre que el crédito se concedió con base en los ingresos familiares para hacer posible el derecho constitucional a una vivienda digna, o se refieran a lo establecido en la fracción VIII de este artículo, en que se ajustará a lo determinado por la autoridad judicial.”

Como se observa, la Ley en mérito establece claramente cuáles son los descuentos o gravámenes que se relacionan con las obligaciones adquiridas como servidores públicos y aquellos que únicamente inciden en su vida privada. De este modo, los descuentos que no se relacionen con el gasto público o con el ejercicio de sus funciones, es información de carácter confidencial.

**Sistema de Capitalización Individualizado.**

Sobre este rubro, debe señalarse que conforme al Díptico publicado por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios , (consultado el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, a la diez horas en la página electrónica <http://www.issemym.gob.mx/sites/www.issemym.gob.mx/files/Sistema%20de%20Capitalizacion%20Individual.jpg>) el Sistema de Capitalización Individualizado es el mecanismo mediante el cual, un servidor público y la Institución en la que labora, acumulan recursos, **adicionales a su pensión;** mismo que se integra hasta por tres rubros, los cuales son los siguientes:

* **Subcuenta de cuota obligatoria**; que corresponde a un porcentaje del sueldo sujeto a cotización, que se descuenta al servir público de manera automática.
* **Subcuenta de aportación obligatoria**: que es la aportación que realiza la Institución a favor del servidor público, el cual equivale a un porcentaje del sueldo sujeto a cotización.
* **Subcuenta voluntaria:** que es la cantidad que cada servidor público decide ahorrar de acuerdo con sus aportaciones, permitiendo acumular mayores ingresos para su retiro.

En razón de lo anterior, debe considerarse que la subcuenta de cuota obligatoria y subcuenta de aportación obligatoria**,** deben ser considerados datos de naturaleza pública, ya que su publicidad es necesaria, considerando que se trata del ejercicio de recursos públicos que se les ha asignado a las dependencias y entidades y, la publicidad de dicha información permite conocer con certeza si el monto de las aportaciones que la Institución en la que labora el servidor público, es equivalente al porcentaje del sueldo bruto mensual de los servidores públicos. Situación que se robustece, con el Criterio 05/10 emitido por el entonces Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, mismo que se trae por analogía, cuyo texto y rubro es el siguiente:

**“Naturaleza de la información relativa a los montos aportados al Seguro de Separación Individualizado.** De conformidad con la normatividad aplicable, las aportaciones relativas al Seguro de Separación Individualizado pueden ser divididas en tres grupos: las realizadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; las que realizan los servidores públicos a través de las retenciones que efectúa la dependencia o entidad vía nómina; y las aportaciones adicionales extraordinarias que realizan los servidores públicos. En términos de lo que establecen los artículos 7, fracción IV y 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 14 de su Reglamento, se considera que la información del primer y segundo grupo es de carácter público. Respecto del primer monto, se debe señalar que se trata de la entrega de recursos públicos adicionales a aquellos que corresponden al sueldo bruto mensual integrado, es decir, se trata de una prestación que se obtiene a partir de una partida presupuestal distinta a la que corresponde al sueldo de dichos trabajadores. Respecto del segundo monto, esto es, la parte que aportan los servidores públicos, es de señalarse que, aún cuando se refiere a una decisión personal sobre su patrimonio, su publicidad es necesaria para determinar si las dependencias y entidades correspondientes han manejado los recursos públicos federales que les son asignados de conformidad con las disposiciones legales aplicables; esto es, la publicidad de dicha información permite conocer con certeza si el monto de las aportaciones que el gobierno federal destina al pago de la prima del Seguro de Separación Individualizado es equivalente al porcentaje del sueldo bruto mensual integrado que los servidores públicos aportan al referido seguro. En relación con el tercer grupo, cabe destacar que se trata de aportaciones adicionales extraordinarias, respecto de las cuales las dependencias y entidades no aportan pago alguno; por lo tanto, se trata de decisiones personales sobre el uso y destino que los servidores públicos desean dar a su patrimonio, información que de conformidad con los artículos 3, fracción II y 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, debe clasificarse como confidencial.”

En suma, debe considerarse que la naturaleza de la **subcuenta de cuota obligatoria y de la subcuenta de aportación obligatoria,** son datos de naturaleza pública y por ende no procede su clasificación en términos del artículo 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. Caso contrario, las aportaciones voluntarias al Sistema de Capitalización Individual, serán confidenciales.

**Del nombre de policías.**

No es ocioso mencionar que, dentro del cúmulo de información solicitada por el particular, se encuentran también información de nómina de los elementos de seguridad pública; por ello, es necesario señalar que las condiciones en las cuales se deberá entregar la información solicitada adquieren una especial naturaleza.

En efecto, este instituto advierte que otorgar acceso al nombre de policías operativos podría comprometer la integridad de los mismos, de conformidad con lo que establece el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios:

**“Artículo 140.** El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando por razones de interés público, ésta sea clasificada como reservada, conforme a los criterios siguientes:

(…)

**IV. Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física;**

(…)”

En este contexto, este Pleno considera que dar a conocer los nombres de servidores públicos que realizan funciones en materia de seguridad, tal como es el caso de los policías, los vuelve identificables y posiblemente reconocibles para grupos delictivos; así, dicha información puede ser utilizada para **vulnerar la vida, seguridad o salud de dichos elementos, incluso la de sus familias o entorno social,** demás, de que aumenta el riesgo de que personas ajenas a los intereses institucionales e intenten realizar actos tendientes a inhibir o entrometerse en las funciones de los policías municipales, lo cual causaría una vulneración a la seguridad municipal.

Por lo tanto, el proporcionar el nombre de los elementos policiales operativos dentro de la información de nómina —recibos o comprobantes de pago— del personal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, o equivalente, pone en riesgo de manera directa la vida y la seguridad de dichos servidores públicos, siendo obligación de la Institución protegerla en todo momento para salvaguarda de sus integrantes.

Lo anterior adquiere razón toda vez que la información solicitada hace identificable a los integrantes de seguridad pública, ya que permite que su identidad pueda determinarse de manera directa, pudiéndose ocasionar riesgos por la posible utilización y difusión de la información por grupos delictivos.

Asimismo, existe la posibilidad de que personas ajenas a la Institución la utilicen para sorprender a la ciudadanía y realicen extorsiones telefónicas al amparo de usurpar la identidad de algún servidor público encargado de la seguridad pública; o que integrantes de organizaciones criminales los contacten para presionar en entregar información, como por ejemplo, la relacionada con investigaciones, nombres de integrantes que participan en los operativos e incluso documentación emitida por el **SUJETO OBLIGADO**, colocando en inminente riesgo la vida de todos los integrantes, menoscabando así las actividades de prevención del delito y combate a la delincuencia.

Así como el artículo 6º Constitucional por un lado garantiza el derecho de acceso a la información, por otro lado, el derecho a la vida y la seguridad de las personas se encuentran protegidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 30. Bajo este contexto es necesario confrontar ambos derechos fundamentales, cuyo ejercicio en este caso particular es por lo que es necesaria la ponderación de ambos para que uno de ellos sea ejercido en la mayor medida posible.

El riesgo de perder la vida, la seguridad o la integridad se encuentra presente y es de mayor gravedad que la negativa de acceso a la información solicitada, la divulgación de la información, puede generar un daño desproporcionado o innecesario, lo cual debe evitarse en la medida de lo posible, frente a aquella que se solicita. Es de interés público y socialmente relevante la protección a la vida y seguridad de todas y cada una de las personas sobre cualquier otro derecho fundamental, por lo que se debe proteger a quienes trabajan y ayudan al logro de la seguridad pública.

En ese mismo contexto, resulta pertinente establecer que la Constitución Política de los Estados unidos mexicanos y los Tratados Internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de Derechos Humanos, establecen que el derecho a la vida y la seguridad personal son los bienes supremos tutelados por los gobiernos, esto quiere decir, que no existe derecho alguno por encima de la vida y la seguridad personal. El derecho al acceso a la información, tutelado en el artículo sexto de nuestra Carta Magna, no es absoluto per se, toda vez que su objetivo es facultar a las personas a tener acceso a la información que les permita conocer cómo funcionan los órganos de gobierno, como parte fundamental de todo Estado democrático; dicho derecho permite a las personas tener una participación activa en la toma de decisiones de los gobernantes y a su vez, funciona como un ejercicio de fiscalización para supervisar las actividades que realiza el Estado.

Por lo que, el derecho a la vida y seguridad nacional tiene una-primacía que el derecho al acceso a la información, por lo que el bien jurídico a salvaguardarse primordialmente, es la vida y la seguridad de los servidores públicos encargados de la seguridad pública.

Al respecto, cabe hacer mención que el artículo 81 fracción III de la Ley de Seguridad del Estado de México, establece lo siguiente:

“Artículo 81.- Toda información para la seguridad pública generada o en poder de Instituciones de Seguridad Pública o de cualquier instancia del Sistema Estatal debe registrarse, clasificarse y tratarse de conformidad con las disposiciones aplicables. No obstante lo anterior, esta información se considerará reservada en los casos siguientes:

(…)

III. La relativa a servidores públicos miembros de las instituciones de seguridad pública, cuya revelación pueda poner en riesgo su vida e integridad física con motivo de sus funciones;

(…)”

(Énfasis añadido)

Argumento que se fortalece con lo estipulado en el criterio número 6-09, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, antes (INAI)**,** el cual refiere:

**NOMBRES DE SERVIDORES PÚBLICOS DEDICADOS A ACTIVIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD, POR EXCEPCIÓN PUEDEN CONSIDERARSE INFORMACIÓN RESERVADA**. “De conformidad con el artículo 7, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el nombre de los servidores públicos es información de naturaleza pública. No obstante lo anterior, el mismo precepto establece la posibilidad de que existan excepciones a las obligaciones ahí establecidas cuando la información actualice algunos de los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley. En este sentido, se debe señalar que existen funciones a cargo de servidores públicos, tendientes a garantizar de manera directa la seguridad nacional y pública, a través de acciones preventivas y correctivas encaminadas a combatir a la delincuencia en sus diferentes manifestaciones. Así, es pertinente señalar que en el artículo 13, fracción I de la ley de referencia se establece que podrá clasificarse aquella información cuya difusión pueda comprometer la seguridad nacional y pública. En este orden de ideas, una de las formas en que la delincuencia puede llegar a poner en riesgo la seguridad del país es precisamente anulando, impidiendo u obstaculizando la actuación de los servidores públicos que realizan funciones de carácter operativo, mediante el conocimiento de dicha situación, por lo que la reserva de la relación de los nombres y las funciones que desempeñan los servidores públicos que prestan sus servicios en áreas de seguridad nacional o pública, puede llegar a constituirse en un componente fundamental en el esfuerzo que realiza el Estado Mexicano para garantizar la seguridad del país en sus diferentes vertientes” (Sic)

En tal contexto se deberá proceder a la clasificación de los nombres de los elementos de policía que realicen actividades operativas.

### e) Conclusión

Atendiendo a lo analizado se puede concluir que el motivo de inconformidad hecho valer por **LA RECURRENTE** es fundado y suficiente para modificar la respuesta, ordenando al **SUJETO OBLIGADO** haga entrega de lo solicitado en términos del presente considerando.

Finalmente, al haberse dejado datos personales visibles en la respuesta entregada **resulta procedente dar vista a la Dirección General de Protección de Datos Personales** de este Instituto, para que, en el ámbito de sus facultades correspondientes, resuelvan lo conducente y determine, en su caso, el grado de responsabilidad en el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios.

Así, con fundamento en lo establecido en los artículos 5, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y en los artículos 2, fracción II, 9, 29, 36, fracciones I y II, 176, 178, 179, 186 y 188 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, este Pleno:

# RESUELVE

**PRIMERO.** Se **MODIFICA** la respuesta entregada por el **SUJETO OBLIGADO** en la solicitud de información **00292/TLALMANA/IP/2023**, por resultar **FUNDADAS** las razones o motivos de inconformidad hechos valer por **LA PARTE RECURRENTE** en el Recurso de Revisión **06917/INFOEM/IP/RR/2023**,en términos del considerando **SEGUNDO** de la presente Resolución.

**SEGUNDO.** Se **ORDENA** al **SUJETO OBLIGADO**, a efecto de que, previa búsqueda exhaustiva y razonable de la información, entregue a través del SAIMEX, en su caso en versión pública, los documentos que den cuenta de lo siguiente:

1. En forma íntegra las facturas F1285, F1213, F1224, F1233, F1261, F1254 y F1277 remitidas vía Informe Justificado.
2. La cantidad que adeuda a Comisión Federal de Electricidad al 5 de septiembre de 2023.
3. La cantidad que adeuda a cualquier otra empresa que haya prestado sus servicios al ayuntamiento al 5 de septiembre de 2023.
4. La Conciliación de Nómina de la primera y segunda quincena de agosto de 2023.
5. Ingresos y egresos, del 1 de enero al 30 de agosto de 2023.
6. El Directorio de todo el personal que labora en el ayuntamiento al 5 de septiembre de 2023.
7. La antigüedad de los servidores públicos faltantes, al 5 de septiembre de 2024.
8. Las renuncias o despidos justificados del 1 de enero al 30 agosto de 2023, señalados en su informe justificado, debiendo contener el nombre y cargo de los servidores públicos.
9. Denuncias y quejas realizadas dentro de contraloría interna del Ayuntamiento entre el cinco de septiembre de dos mil veintidós al cinco de septiembre de dos mil veintitrés, de procedimientos que hayan causado estado.
10. Denuncias en mesa de responsabilidades en contra de las actuales autoridades municipales y servidores públicos del ayuntamiento, al cinco de septiembre de dos mil veintitrés, de procedimientos que hayan causado estado.
11. Los resultados de auditorías externas e internas realizadas al Ayuntamiento del 5 de septiembre de dos mil veintidós al cinco de septiembre de dos mil veintitrés.

Para el caso de la información ordenada en los incisos b), c), k), i) y j) no se haya generado, poseído y administrado bastará que de forma clara y precisa se haga del conocimiento de **LA PARTE RECURRENTE**.

Respecto de los incisos i) y j) en el caso de **denuncias y quejas** cuya sustanciación aún se encuentre en trámite, deberá realizar la clasificación de la información como reservada, debiendo observar las excepciones y procedencias determinadas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

De ser necesarias las versiones públicas, se deberá entregar el Acuerdo del Comité de Transparencia mediante el cual se apruebe la clasificación de información, en términos del artículo 49, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**TERCERO.** **Notifíquese** vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX)** la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, para que conforme al artículo 186 último párrafo, 189 segundo párrafo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente y, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**CUARTO.** Notifíquese a **LA PARTE RECURRENTE** la presente resolución vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX).

**QUINTO**. Hágase del conocimiento a **LA PARTE RECURRENTE** que, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, podrá impugnar la presente resolución vía Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables.

**SEXTO.** De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el **SUJETO OBLIGADO** podrá solicitar una ampliación de plazo de manera fundada y motivada, para el cumplimiento de la presente resolución.

**SÉPTIMO.** Gírese oficio al Titular de la **Dirección General de Protección de Datos Personales**, en atención al artículo 82, fracción XXVII de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, en términos del Considerando **SEGUNDO** de la presente resolución.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA, SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA EMITIENDO VOTO PARTICULAR Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA EMITIENDO VOTO PARTICULAR, EN LA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO, ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.

SCMM/AGZ/DEMF/ESS

1. Consultable en: <https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5114004&fecha=11/10/2009#gsc.tab=0> [↑](#footnote-ref-1)
2. https://app.cfe.mx/Aplicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=2405, consultada el diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro. [↑](#footnote-ref-2)
3. Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.Segundo. Para los efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por:

   **XVII. Hipervínculo:** Conexión o enlace entre una información y otra dentro de un documento HTML (Lenguaje de Marcas de Hipertexto, en inglés HyperText Markup Language); Fracción adicionada DOF 28/02/2024. [↑](#footnote-ref-3)
4. El Glosario localizado en la página de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (registro 170), consultado en <http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Glosario> el veintiuno de agosto de dos mil veinticuatro. [↑](#footnote-ref-4)
5. el Glosario de términos más usuales en la Administración Pública Federal, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Consultado en http://www.apartados.hacienda.gob.mx/contabilidad/documentos/informe\_cuenta/1998/cuenta\_publica/Glosario/n.htm, el veintiuno de agosto de dos mil veinticuatro. [↑](#footnote-ref-5)
6. Políticas para la Integración del Informe Trimestral de los Sujetos de Fiscalización Municipales, OSFEM. [↑](#footnote-ref-6)
7. **NÓMINA DE SERVIDORES PÚBLICOS. PERIODO DE BÚSQUEDA Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN, CUANDO NO SE PRECISA EN LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN.** Cuando el particular no refiriera el periodo respecto del cual requiere la información, o bien, de la solicitud presentada no se adviertan elementos que permitan identificarlo, tratándose exclusivamente de información relativa a la nómina, los Sujetos Obligados deberán entregar lo correspondiente a las últimas dos quincenas pagadas previo a la fecha de presentación de la solicitud.

   Precedentes: • En materia de acceso a la información pública. 16752/INFOEM/IP/RR/2022 y acumulados. Aprobada por mayoría de votos, emitiendo voto particular los Comisionados Sharon Cristina Morales Martínez, Guadalupe Ramírez Peña y Luis Gustavo Parra Noriega. Ayuntamiento de Toluca. Comisionada Ponente Sharon Cristina Morales Martínez. Sesión 43 – 2023. • En materia de acceso a la información pública. 07558/INFOEM/IP/RR/2023. Aprobada por unanimidad de votos. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos. Comisionada Ponente María del Rosario Mejía Ayala. Sesión 03 – 2024. • En materia de acceso a la información pública. 07557/INFOEM/IP/RR/2023. Aprobada por unanimidad de votos, emitiendo voto disidente la Comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Secretaría de Educación. Comisionada Ponente Sharon Cristina Morales Martínez. Sesión 05 – 2024. [↑](#footnote-ref-7)
8. *https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG\_300118.pdf* [↑](#footnote-ref-8)
9. *https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LDFEFM.pdf* [↑](#footnote-ref-9)
10. <https://www.issemym.gob.mx/sites/www.issemym.gob.mx/files/32%20Lineamientos%20Plataforma%20PRISMA.PDF> [↑](#footnote-ref-10)
11. Tomado de <https://www.conceptosjuridicos.com/mx/denuncia/> [↑](#footnote-ref-11)
12. Tomado de: <http://cgservicios.df.gob.mx/contraloria/cursos/MARCOJURIDICO/paginas/qd.php> [↑](#footnote-ref-12)
13. Registro digital: 203143. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Materia(s): Común. Tesis: VI.2o. J/43. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Marzo de 1996, página 769. Tipo: Jurisprudencia. [↑](#footnote-ref-13)
14. Registro digital: 175082. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Materia(s): Común. Tesis: I.4o.A. J/43. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Mayo de 2006, página 1531. Tipo: Jurisprudencia. [↑](#footnote-ref-14)
15. Criterio 3/19 Para efectos de la búsqueda de la información, que el requerimiento se refiere al año inmediato anterior, contado a partir de la fecha en que se presentó la solicitud. [↑](#footnote-ref-15)
16. Tomado de <https://fgjem.edomex.gob.mx/mision-vision-objetivo> [↑](#footnote-ref-16)
17. Del Instituto Nacional de Transparencia, Accesos a la Información y Protección de Datos Personales. Clave de control: SO/003/2019, Materia: Acceso a la Información Pública. Acuerdo ACT-PUB/11/09/2019.06 [↑](#footnote-ref-17)
18. Registro digital 2018460. I.10o.A.79 A (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, página 2318. [↑](#footnote-ref-18)
19. *DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.*

    *Amparo en revisión 149/2018. Amanda Ibáñez Molina. 6 de septiembre de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Enrique Báez López. Secretario: Roberto César Morales Corona.* [↑](#footnote-ref-19)